

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 19º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5659-2020
CARATULADO : BELTRÁN/FISCO DE CHILE / CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, nueve de Febrero de dos mil veintitrés

VISTOS:

Con fecha 26 de marzo del 2020, comparece el abogado habilitado, **don Nelson Guillermo Caucoto Pereira**, abogado, con domicilio en calle Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1104, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en representación judicial de **don Mario del Carmen Beltrán Herrera**, pensionado, domiciliado en calle Talcamávida N°737, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana e interpone en juicio de hacienda ordinario de mayor cuantía demanda de indemnización de daños y perjuicios por la suma de **\$150.000.000.- de pesos**, más reajustes e intereses, en contra del **Fisco de Chile**, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don **Juan Antonio Peribonio Poduje**, abogado, domiciliada en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Con fecha 23 de septiembre del 2020, la parte demandada fue notificada en forma personal de la demanda.

Con fecha 09 de octubre del 2020, comparece el Consejo de Defensa del Estado, a través de su Abogada Procuradora Fiscal Subrogante y evacúa la contestación de la demanda.

Con fecha 27 de octubre del 2020, se tiene por evacuada la contestación de la demanda y se confiere traslado a la réplica.

Con fecha 02 de noviembre del 2020, la demandante evacúa el trámite de la réplica.

Con fecha 11 de noviembre del 2020, se tiene por evacuado el trámite de la réplica y se confiere traslado a la dúplica.

Con fecha 18 de noviembre del 2020, la parte demandada evacúa la dúplica.

Con fecha 23 de noviembre del 2020, se tiene por evacuado el trámite de la dúplica.

Con fecha 28 de abril del 2021, se recibe la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.



Foja: 1

Con fecha 01 de agosto del 2022, se acoge reposición en contra de la resolución que recibe la causa a prueba.

Con fecha 28 de noviembre del año 2022, encontrándose la causa en estado, se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece el abogado, **don Nelson Guillermo Caucoto Pereira**, en representación judicial de **don Mario del Carmen Beltrán Herrera**, pensionado, e interpone en juicio ordinario de hacienda de mayor cuantía demanda de indemnización de perjuicios por comisión de crímenes de lesa humanidad en contra del **Fisco de Chile**, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, don **Juan Antonio Peribonio Poduje**, abogado, a fin que sea acogida y se condene a la demandada al pago de la suma de **\$150.000.000.-**, o en su defecto la suma que el Tribunal estime en justicia, más reajustes e intereses y costas.

Señala que el demandante ha sido reconocido por el Estado de Chile como víctima calificada de prisión política y torturas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, mejor conocida como “Comisión Valech” establecida por el Decreto Supremo N°1.040 de 2003, con el número 1059.

Hechos.

Al efecto relata que con fecha 8 de Octubre de 1974, el demandante, mientras caminaba en dirección a la Universidad de Concepción para asistir a las clases que cursaba en su calidad de estudiante en Ingeniería en Ejecución Mecánica fue detenido por una patrulla de Carabineros en una de las calles aledañas a la Universidad. La víctima fue detenida arbitrariamente sin orden legal ni judicial alguna. Luego de la violenta detención fue conducido a la primera Comisaría de Concepción en calle Paicavi lugar donde comenzó a ser interrogado y torturado de manera inmediata por los miembros de dicha Comisaría. Entre las torturas que se le infringieron se cuentan golpes de puños y puntapiés en la región abdominal, golpes de rodilla en los genitales y golpes en las plantas de los pies con objetos metálicos cuestión que lo tuvo sin poder caminar por varias horas. Posteriormente fue trasladado al cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile de Concepción lugar donde nuevamente se le somete a cruentas torturas, esta vez con electricidad en los genitales y en la boca mientras se le mantenía colgado desde el techo del cuartel con un cordel atado a sus brazos los que a la vez se encontraban atados entre sí por la espalda provocando intensos dolores de hombros y espalda, técnica de tortura conocida como “*colgamientos*”. Estuvo detenido en dicho cuartel de la PDI por tres días siendo sometidos a dichas sesiones de torturas de manera diaria y tres veces cada día. Hasta hoy la víctima tiene deformaciones en la espalda por torturas entre las que además se cuenta la introducción de un tablón entre sus brazos y su espalda con los pies atados dándole golpes y ahogándolo con toallas húmedas aplicándole a la vez, nuevamente electricidad. Se le privó de alimento por 3 días y se le introdujo líquido rojo en las zonas genitales para dar la sensación de sangramiento. Luego de tres días, fue entregado a la Marina en la base Naval de Talcahuano siendo entregado a la policía secreta de la Armada. Ahí nuevamente se le sometió a sesiones diarias de torturas entre los que se cuenta la electricidad en la boca y genitales y golpes por varios marinos en todas las partes del cuerpo. Los marinos lo golpeaban prácticamente por diversión y muchas veces en estado de ebriedad estando siempre vendado. Al cabo de ocho días es trasladado junto a seis detenidos universitarios más a otra base naval en los cerros de Talcahuano cerca de Caleta Tumbes, lugar donde se le dejó tendido en unas caballerizas



Foja: 1

por un espacio de varias horas. En dicho lugar nuevamente se le somete a la parrilla con descargas eléctricas constantes. Los miembros de la armada le decían constantemente que arrancara pero no lo hizo pues le habrían aplicado ley de fuga. Luego de casi 2 semanas fue llevado a la cárcel de la armada ubicada en la Isla Quiriquina donde la víctima permaneció en prisión sin proceso alguno en su contra.

Cuatro meses después de preso en la Isla Quiriquina fue trasladado a la cárcel de Concepción ciudad donde le abrió un proceso militar acusándolo falsamente de pertenecer a un grupo paramilitar con instrucción militar para actuar en la ciudad de Concepción y producir así el derrocamiento de Pinochet. Por estos falsos hechos se le condenó en el Consejo de Guerra 1611-74 a la pena de 3 años y un día de prisión efectiva que cumplió hasta Diciembre de 1976 en la cárcel de Concepción siendo trasladado para cumplir dicha pena a la cárcel de Curicó lugar desde donde salió recién el 9 de Octubre de 1977. Luego de eso la víctima fue seguida y acosada por militares por un espacio de 2 años. Por supuesto además que le impidió volver a la Universidad. Estuvo preso hasta el 9 de Octubre de 1977. Su castigo, torturas, prisión política y el cautiverio duraron un poco más de 3 años.

Su representado logró sortear con vida los brutales actos de los agentes del Estado, más precisamente de Carabineros, detectives y miembros de la armada. Pero igualmente fue perseguido, secuestrado, torturado y tomado preso por un período muy considerable de tiempo. Luego del terrible e inhumano cautiverio en el cuartel sufrió tratos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, carentes del más mínimo riesgo de humanidad.

Con ocasión de la tortura y prisión política su mandante sufrió una serie de problemas físicos y psicológicos que lo han acompañado toda su vida manteniéndose hasta el día de hoy las huellas imborrables de la tortura. Problemas de sueño, neurológicos, físicos y psicológicos afectan a nuestro mandante hasta hoy en día, todo ello producto de la brutal tortura sufrida. Los dolores de espalda y hombros que sufre hasta hoy son indecibles.

Esta situación marcó de manera determinante su vida y la de su familia. La tortura brutal le fue imposible olvidarla y sólo le restó aprender a vivir con tan terribles recuerdos. Lo que sufrió y presenció es prácticamente inenarrable. Los horrendos crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas represivas de la Dictadura militar afectaron su vida de manera permanente. Estuvo preso sólo por motivos políticos. El actor tuvo que recibir ayuda psicológica por parte de una serie de instituciones durante un buen período de tiempo para tratar de lidiar con las consecuencias emocionales de la tortura, luego partió al exilio a tratar de olvidar en lo posible lo sucedido. Tuvo que recibir la ayuda además de su familia para intentar de sobrellevar los daños inolvidables que la tortura le produjo.

Por estos anteriores motivos fue calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados con el número 1059, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N°1.040 del año 2003 del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I.

En base a los hechos anteriormente señalados, es que su parte demanda al Estado chileno, por su detención ilegal, secuestro y prisión política sufrida por el demandante, y además por los tratos inhumanos consistentes que recibió a manos de los agentes del Estado, quienes lo torturaron y le mantuvieron como prisionero político en inhumanas condiciones



Foja: 1

Los hechos relatados encuadran en un episodio de lesa humanidad.

Señalado lo anterior, la parte demandante sostiene que los hechos relatados se encuadran dentro de un crimen de lesa humanidad, formando parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como de lesa humanidad según lo establecido en el artículo 6, literal C del Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido ratificado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998.

Estos crímenes ignominiosos e intolerables para la humanidad han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional, cuestión que resulta fundamental a la hora de resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile en el presente caso.

En tal sentido la Iltrma. Corte de Apelaciones de Santiago ha establecido que *“resulta una exigencia previa determinar la fuente u origen de la acción impetrada por los actores [...] lo anterior tiene su fundamento en la existencia de un ilícito y las normas pertinentes, conducirán necesariamente a razonar acerca de la identidad y naturaleza del delito ‘contra la humanidad o de lesa humanidad’, tal como se ha calificado la infracción penal en cuestión por la doctrina penal nacional e internacional”* (C. Santiago, 16 de noviembre 2006, “Ruz y otro con Fisco de Chile”, Rol 4464-2001, Considerando 2º).

La responsabilidad del Estado analizada desde la Constitución Política de la República.

El artículo 38, inciso 2º, de la Constitución Política de la República señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Este precepto consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica.

En efecto, la Excm. Corte Suprema ha sentenciado que: *“la responsabilidad del Estado por actos de la administración [...] emana de la naturaleza misma de esa actividad estatal, en cuanto organización jurídica y política de la comunidad y de las variadas acciones que debe desarrollar en el ámbito de las funciones que les corresponde llevar a cabo para el cumplimiento de los fines y deberes reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política, para lo cual debe hacer uso de todas las potestades y medios jurídicos y materiales que ella le otorga, lo que hace que las distintas responsabilidades que puedan causar esas acciones, se sometan a normas y principios de la rama del derecho público”*. (C. Suprema, 26 de enero del 2005, “Bustos Riquelme con Fisco de Chile”, Rol 3354-03, Considerando 11º).

El fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supra constitucional y también legal, y todas ellas -cuando menos- son normas propias del ámbito del Derecho público. Para ilustrar mejor este dicho punto, señala que es pertinente tener presente el estado actual de la jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema, para lo que pueden revisarse entre otros, casos como “Caro con Fisco”, “Bustos con Fisco” y “Albornoz con Ortiz y Fisco”. Así, en el caso “Caro con Fisco” la Corte Suprema ha sentenciado: *“que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad del Estado, si bien se ha consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución*



Foja: 1

Política de la República no indica cual es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4 del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Esta disposición previene que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado” (C. Suprema, 19 de mayo 2005, “Caro Silva con Fisco de Chile”, Rol 4004-2003, Considerando 6°).

Por otra parte, en el caso “Albornoz con Ortiz y Fisco de Chile” se refuerza la misma idea, esto es: *“que, tal como lo ha decidido anteriormente esta Corte, la responsabilidad del Estado por los daños que causen los órganos de su administración enunciada en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración, es de derecho público y de carácter genérico, por emanar de la naturaleza misma de su actividad en el ámbito de las funciones que le corresponde llevar a cabo para los fines que le cometen la Constitución Política y las leyes, para lo cual debe hacer uso de las potestades, medios y acciones materiales conducentes a ellos” (C. Suprema, 13 diciembre 2005, “Albornoz con Ortiz y Fisco de Chile”, Rol N° 4006-2003, Considerando 19°).*

Luego, para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan la presente demanda, se remite al Capítulo I de la Constitución Política de la República sobre las Bases de la Institucionalidad. Allí el constituyente desarrolla los principios basales desde donde se estructura todo el sistema institucional. Así, el artículo que da inicio a nuestra Carta Primera en su inciso 4° prescribe que *“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”*. En concordancia con lo anterior, el artículo 5° reafirma -en su inciso 2°- que *“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”*.

La conjunción de ambos preceptos resume la doctrina completa del constitucionalismo, o sea, del poder limitado por el Derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano. (Cea Egaña, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Tomo I. Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, p. 210). Al respecto, transcribe lo señalado por el Tribunal Constitucional en cuanto: *“que de lo expuesto en las consideraciones anteriores se infiere con nitidez que el ordenamiento institucional estructurado por la Constitución de 1980 descansa sobre ciertos principios y valores básicos, entre los cuales cabe señalar [...] la libertad del hombre, que los derechos fundamentales de la persona humana son anteriores y superiores al Estado y la Constitución, razón por la cual no los crea sino que los “reconoce y asegura”; que el Estado en cumplimiento de su finalidad propia, cual es promover el bien común, debe darles segura y eficaz protección [...] que el ejercicio de la soberanía que se realiza por el pueblo y por las autoridades que la Constitución establece reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana;...que todos estos principios se encarnan en disposiciones concretas de la Carta Fundamental como son, entre otros, los artículos 1°, 4°, 5°, inciso segundo, y 19, en especial su número 3, inciso séptimo; y que estos preceptos no son meramente declarativos sino que constituyen disposiciones expresas que obligan a gobernantes y gobernados tanto en sí mismas, como también, en cuanto normas rectoras y vitales que coadyuvan a desentrañar el verdadero sentido y espíritu del resto de las disposiciones de*



Foja: 1

la Constitución” (Tribunal Constitucional de Chile, 21 de diciembre de 1987, “Requerimiento en contra del Señor Clodomiro Almeyda, Rol 46 Considerandos 19° 20° y 21°.

De este modo, las disposiciones reseñadas en conjunto con los artículos 6° y 7° de la Constitución, que a su vez establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad que como ha quedado en evidencia, emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

La responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional.

Ahora bien, este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el derecho internacional humanitario, así como el Derecho Internacional de los DDHH, del cual el Estado de Chile forma parte.

El Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estado Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (artículo 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), así como reconociendo el Derecho internacional imperativo o ius cogens ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden al deber general de “respeto de los derecho esenciales del hombre” por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Todo lo anterior, esto es, el desarrollo de este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

De allí, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente (Cfr. Aguiar, Asdrúbal. La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 17, IIDH, 1993. p. 25). Se trata en consecuencia de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.



Foja: 1

Confirma normativamente esta interpretación el encabezado del artículo 19 de la Constitución Política de la República que establece los derechos y deberes constitucionales al señalar de modo categórico que: “La Constitución asegura a todas las personas [...]”.

Así, la Constitución reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, obligándose ante la comunidad internacional a su efectiva vigencia a través del artículo 5º, inciso 2º, que incorpora toda la normativa internacional aplicable en la especie. En igual sentido, el Artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reza: “*Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social*”.

Por último, el artículo 19, N°20 de la Carta Fundamental indica que “*la Constitución asegura a todas las personas la igual repartición de las cargas públicas*”. Aquí se consagra la idea básica según la cual nadie está obligado a soportar una carga que no haya sido establecida por la ley, ni aun en pro del bien común, como lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema.

La improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad.

Conforme a lo ya expuesto, resulta improcedente aplicar normas y principios de derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de *lesa humanidad*. La correcta resolución del presente caso requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A contrario sensu, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto, como es fácil comprender, se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses. Al respecto, pueden revisarse además los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

La diferencia entre uno y otro sistema de responsabilidad es evidente. Por el momento basta con recordar que: “*es claro que el perjuicio causado a un particular por otro o por el Estado en cuanto sujeto de relaciones privadas, es diverso al perjuicio que se le puede causar a un particular por una actuación ilícita y dañosa de un Estado con relación a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana*”. (Nash, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 2004, p. 23).

En el mismo sentido, estima prudente que, para no incurrir en la denominada falacia lógica del error de categoría, reproducir el razonamiento de dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quienes se han pronunciado de forma directa sobre lo inadecuado que resulta extender por la vía de la analogía ciertos conceptos propios del Derecho Civil para resolver conflictos que versen sobre violaciones a los derechos fundamentales del ser humano. En efecto, estos jueces han dicho que: “*los conceptos jurídicos, por cuanto encierran valores, son producto de su tiempo, y como*



Foja: 1

*tales no son inmutables. Las categorías jurídicas cristalizadas en el tiempo y que pasaron a ser utilizadas –en un contexto distinto del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos- para regir la determinación de las reparaciones se vieron fuertemente marcadas por tales analogías de derecho privado: es el caso, v. gr., de los conceptos de daño material y daño moral, y de los elementos de *damnum emergens* y *lucrum cessans*. Dichos conceptos han estado fuertemente determinados por un contenido e interés patrimoniales, -lo que se explica por su origen,- marginando lo más importante en la persona humana como es su condición de ser espiritual. Tanto es así que hasta el mismo daño moral es comúnmente equiparado, en la concepción clásica, al llamado “daño no patrimonial”. El punto de referencia sigue, aun, siendo el patrimonio. La transposición pura y simple de tales conceptos al plano internacional no podría dejar de generar incertidumbres. Los criterios de determinación de las reparaciones, de contenido esencialmente patrimonial, basados en analogías con los del Derecho Civil, jamás nos ha convencido, y no nos parecen enteramente adecuados o suficientes cuando se los transpone al dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dotado de especificidad propia.” (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Loayza Tamayo. Reparaciones [art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos] Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C N° 42. Voto razonado conjunto de los jueces Cançado Trindade y Abreu Burelli. Párrafos 7 y 8).*

En este sentido ha fallado la I. Corte de Apelaciones de Santiago que “*tratándose de una violación de los derechos humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, y ello ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación que no lo considera por responder a criterios claramente ligados al interés privado, y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX*”. (Cfr. I. Corte de Apelaciones de Santiago, Caso “Carrasco con Fisco de Chile”, 10.07.2007, Rol N° 6.715-2002).

Por otra parte, señala que cumple con exponer ante esta judicatura un conjunto de razones de texto que los llevan a sostener porqué el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana. Tales razones son las siguientes: **1.-** Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Así, ya de entrada nos parece que el Título XXXV del Libro IV del Código Civil no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado –cuestión, por cierto, inimaginable en los tiempos de Andrés Bello- destinada a torturar, exterminar y/o hacer desaparecer a un número importante de la población nacional sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del artículo 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste, referido a la aplicación sistemática de la tortura, el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional; y, **2.-** Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (artículo 2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (artículo 2321); edificios en ruinas (artículo 2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (artículos 2326 y 2327). Demás está decir que la regla del artículo 2322 -sobre la relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad cuando han cometido crímenes



Foja: 1

de lesa humanidad, más aún es contraria al Derecho internacional pues permite la exculpación estatal ante tan horrendos crímenes. De la misma manera, aunque existe una norma que parece más pertinente a este asunto concreto –el caso de quien dispara armas de fuego de manera imprudente (Art.2329, N°1)- con todo, dicha regla también es inadecuada para resolver casos de violaciones intencionales, masivas y sistemáticas a los derechos esenciales de un sector no menor de habitantes del Estado.

La imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad.

Por otro lado, la materia que trata la presente causa queda gobernada por las normas de carácter público e internacional -por sobre las meramente privadas-, e implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

En efecto, en toda sociedad democrática y respetuosa de la libertades de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona –derechos que, por lo demás, se hallan protegidos por los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos y por los N° 1 y 7 del artículo 19 de la Carta Fundamental- constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

Por su parte, la citada Convención Americana –tratado internacional ratificado por Chile y actualmente vigente en su territorio por la vía del artículo 5° inciso 2°, de la Constitución Política- señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha Convención.

Si bien por un lado es efectivo que en ninguna disposición expresa de la Convención Americana se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Administrativo y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así se encuentra establecido en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, al disponer que: “*La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: [...] c) los principios generales del Derecho reconocido por las naciones civilizadas*”. [*Tales*] *principios generales del Derecho [...] reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos*” (Cfr. E. Corte Suprema, 14.10.2009, “López con Fisco de Chile”, Rol 5570-2007, voto disidente del Ministro Sr. Sergio Muñoz Gajardo. Considerando 18).

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –haciendo suyo el razonamiento fijado por la Corte de La Haya desde los albores del Siglo XX– ha establecido que: “*es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia a considerado “incluso una concepción general del derecho”, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo*



Foja: 1

adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (...) la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”. (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez. Indemnización compensatoria. [Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C, N° 7. Párr. 25-26).

Por lo anterior, indica que no es posible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano al interior del sistema interamericano (del cual, Chile, por cierto, es parte) trae aparejada la obligación de reparar el mal causado. En esta materia la norma rectora es el Art. 63 del Pacto de San José. (Cfr. C. Santiago, 18 de enero 2006, “Marfull González con Pinochet Ugarte”, Rol 37.483-2004, Considerando 18°).

Por lo tanto, en Chile, dada su calidad de Estado miembro del sistema interamericano, la lógica que debiera operar en casos de violaciones de derecho humanos de alguna persona tendría que ser la misma: reparar íntegramente el mal causado. Obligación ésta del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber: el principio pro homine, entendiendo por tal la interpretación de sus preceptos en el sentido más favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros. (Cfr. Nikken, P. “El concepto de derechos humanos”, en Estudios Básicos de Derechos Humanos, I.I.D.H., Costa Rica, 1994, pp. 15-17.)

De la misma manera, y tan solo para citar algo de la jurisprudencia más moderna de la Corte Interamericana, cabe tener presente que sobre el citado artículo 63 de la Convención Americana también se ha dicho que: *“ese precepto acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. [...] la reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, el tribunal internacional debe determinar las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer la indemnización que compense por los daños ocasionados. El Estado obligado no puede invocar disposiciones de derecho interno para modificar o incumplir la obligación de reparar. Esta queda sujeta en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) al derecho internacional.”* (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Masacre plan de Sánchez”. Reparaciones. [Artículo 63.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie N° 116. Párrs. 52-53).

Señala que se arriba a la misma lógica conclusión que fluye de una revisión somera de la extensa reglamentación internacional sobre la materia. Ya en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario el artículo 3 de Convenio IV de La Haya relativo a las “Leyes y costumbres de la guerra terrestre” (de 1907) dispone la obligación de las Altas Partes contratantes de pagar una indemnización en caso de violación de sus



Foja: 1

normas. Idéntica concepción recogen los Convenios de Ginebra de 1949 ratificados por Chile el año 1951, particularmente en los artículos 68, relativo al trato de los prisioneros de guerra y 55, que versa sobre protección de las personas civiles en tiempo de guerra, así como en el artículo 91 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Así también menciona la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, instrumento no ratificado por Chile, pero cuya obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de ius cogens. (Cfr. Excma. Corte Suprema 13.12.2006, “Caso Molco”, Rol N° 559-2004. Considerando N° 19). En fin, vale reparar en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998, aprobado por el Decreto Supremo N° 144 publicado el 1° de Agosto de 2009, que en su artículo 75 (sobre reparaciones a las víctimas), establece que: “[...] *La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación*”.

En este mismo orden de ideas, indica que el país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre las cuales, destaca la resolución A/RES/60/147, de 24 de octubre de 2005, los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, que en su Principio II delimita el objeto de la obligación del Estado en materia de vulneración de derechos fundamentales al establecer: “[...] *La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de:* a) *Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones;* b) *Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional;* c) *Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación;* y, d) *Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante*”.

A la luz de todo lo que ha señalado, se puede concluir que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible en virtud del Principio IV de dicho cuerpo legal según el cual: “[...] *Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional*”.

Por último, señala que el Comité Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su 61° Periodo de Sesiones, aprobó el año 2005 el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Allí se lee —en el Principio 23 sobre restricciones a la prescripción— que: “*La prescripción no se aplicará a los delitos graves*”.



Foja: 1

conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación”.

Resume lo anterior, indicando que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales sobre el *jus in bello*.

Indica que así lo han entendido los Tribunales Superiores nacionales y es en ese sentido que la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema le ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los derechos humanos declarando que: “[...] *conforme se ha señalado en el presente veredicto, en autos se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delitos de “lesa humanidad”, calificación que no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito, declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que además, la inviabilidad de proclamar la extinción – por el transcurso del tiempo – de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado*” (Cfr. E. Corte Suprema 21.01.2009, “Episodio Tormen”, Rol N° 3907-2007, Considerando N° 30). Vemos pues, la concreción de los principios (informadores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos) de congruencia y progresividad así como la interpretación e integración de sus normas según el ya citado principio pro homine.

Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad.

A modo ilustrativo, menciona los fallos en que la Excma. Corte Suprema ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil cuando éste emana de un crimen de lesa humanidad: **1.-**“García Guzmán Luis y Otros” Caso Liquiñe, Rol de Ingreso Corte Suprema N° 4662-2007, de fecha 25 de Septiembre de 2008, pronunciado por los Ministros Sr. Nibaldo Segura (disidente), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller y los abogados integrantes Sr. Juan Carlos Cárcamo y Sr. Domingo Hernández (prevención); **2.-**“Sanhueza Luis y Otros”, Rol de Ingreso Corte Suprema N° 6308-2007, de fecha 8 de Septiembre de 2008, pronunciado por los Ministros Sr. Juan Araya, Sr. Nibaldo Segura (disidente), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y el abogado integrante Sr. Hernán Álvarez; **3.-**“Arellano Stark y Otros”, Caso Caravana de la Muerte, Rol de Ingreso Corte Suprema N° 4723-2007, de fecha 15 de Octubre de 2008, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría) Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrante Sr. Juan Carlos Cárcamo; **4.-**“Ofelia de la Cruz Lazo”, Rol de Ingreso Corte Suprema N° 6212-2007, de fecha 29 de Octubre de 2008, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría) Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández; **5.-**“Contreras Sepúlveda Juan Manuel y Otros” “Episodio Tormen”, Rol de Ingreso Corte Suprema N° 3907-2007, de fecha 21 de Enero de 2009, pronunciada por los Ministros Nibaldo Segura (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández; **6.-**Secuestro de David Urrutia Galaz” Rol de Ingreso Corte Suprema N° 4691-2007, de fecha 28 de



Foja: 1

Enero de 2009 pronunciada por los Ministros Sr. Nibaldo Segura (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrante Sr. Oscar Herrera; **7.-**Secuestro de Darío Miranda, Jorge Solovera y Enrique Jeria, Rol de Ingreso Corte Suprema 695-2008, de fecha 9 de Marzo de 2009, pronunciada por los Ministros Sr. Nibaldo Segura (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrante Sr. Fernando Castro; **8.-**“Moreno Mena y otros” Episodio Pitrufrquén, Rol de Ingreso Corte Suprema 5233-2008, de fecha 21 de Diciembre de 2009, pronunciada por los Ministros Sr. Nibaldo Segura (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrante Sr. Nelson Pozo; **9.-**“Episodio Porvenir”, Rol de Ingreso Corte Suprema 6-2009, de fecha 15 de Marzo de 2010, pronunciada por los ministros Sr. Nibaldo Segura (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández; **10.**Ortega con Fisco, Rol de Ingreso Corte Suprema 2080-2008 de fecha 8 de Abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Héctor Carreño (minoría) Sr. Pedro Pierry (minoría), Sr. Haroldo Brito y los abogados integrantes Nelson Pozo y Maricruz Gomez de la Torre; **11.-**“Secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez”, Rol de Ingreso Corte Suprema 2581-2009, de fecha 26 de Abril de 2010, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría) Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, por el abogado integrante Sr. Alberto Chaigneau; **12.-**“Secuestro de Juan de Dios Salinas y Gmo. Bustamante Sotelo”, Rol de Ingreso Corte Suprema 8760-2009, de fecha 22 de Noviembre de 2010, pronunciada por los Ministros Nibaldo Segura (minoría), Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández; **13.-**“Secuestro de Claudio Silva y Fernando Silva Camus”, Rol de Ingreso Corte Suprema, de fecha 20 de Diciembre de 2010, pronunciada por los Ministros Sr. Nibaldo Segura (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrante Sr. Nelson Pozo; **14.-**Episodio “Hospital San Juan de Dios” Secuestro calificado de Franz Bagus, Rol de Ingreso Corte Suprema 2414-2010, de fecha 21 de Abril de 2011, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría) Sr. Rubén Ballesteros (minoría) Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, por el abogado integrante Sr. Benito Mauriz; **15.-**“Secuestro de Jaime Robotham y Claudio Thauby”, Rol de Ingreso Corte Suprema 5436-2010, de fecha 22 de Junio de 2011, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría) Sr. Rubén Ballesteros (minoría) Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández; **16.-**“Secuestro de José Rodríguez Hernández”, Rol de Ingreso Corte Suprema 6601-2011, de fecha 29 de Noviembre de 2011, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría) Sr. Rubén Ballesteros (minoría) Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, por el abogado integrante Sr. Luis Bates; **17.-**Homicidio de José Barrera y Otros Rol de Ingreso Corte Suprema 5720-2010, de fecha 7 de Marzo de 2012, pronunciada por los Ministros Nibaldo Segura (minoría), Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández; **18.-** Homicidio de Carol Flores Castillo, Rol de Ingreso Corte Suprema 5969- 2010, de fecha 9 de Noviembre de 2011, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría) Sr. Rubén Ballesteros (minoría) Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, por el abogado integrante Sr. Nelson Pozo; **19.-** “Secuestro de Grober Venegas” Rol de Ingreso Corte Suprema 3573-2012 de fecha 22 de Noviembre de 2012, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, y los abogados integrantes Sres. Jorge Lagos (minoría) y Emilio Pfeffer (minoría); **20.-**Episodio “Las Vizcachas” Rol de Ingreso Corte Suprema 3841-2012, de fecha 4 de Septiembre de 2012, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Haroldo Brito, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto



Foja: 1

Cisternas y por el abogado integrante Luis Bates; **21.-**“Secuestro de Reinaldo Poseck Pedreros” Rol de Ingreso Corte Suprema 519-2013, de fecha 18 de Julio de 2013, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, y por el abogado integrante Emilio Pfeffer (minoría); **22.-**“Secuestro de Sergio Cádiz y Gilberto Pino” Rol de Ingreso Corte Suprema, de fecha 9 de Enero de 2014 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, y Ricardo Blanco; **23.-**“Episodio Torres de San Borja” Rol de Ingreso Corte Suprema 2911- 2013, de fecha 6 de Enero de 2014 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, y Lamberto Cisternas; **24.-**“Episodio Tejas Verdes”, Rol de Ingreso Corte Suprema 1424-2013, de fecha, de fecha 1 de Abril de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sra. Chevesich (minoría); **25.-**Homicidio de Jorge Parra Alarcón, Rol de Ingreso Corte Suprema 6318- 2013, de fecha 29 de Mayo de 2014, Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sra. Chevesich (minoría) y por el abogado integrante Sr. Luis Bates; **26.-** “Secuestro de Juan Gianelli, José Sagredo y Alfredo Salinas” Rol de Ingreso Corte Suprema 5831-2013, de fecha 10 de Junio de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y por el abogado integrante Sr. Ricardo Peralta (minoría); **27.-**Homicidio Calificado de Luis Fidel Arias Pino, Rol de Ingreso Corte Suprema 1813-2014, de fecha 2 de Septiembre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Guillermo Silva (minoría); **28.-**“Secuestro Calificado de Mario y Nilda Peña Solari”, Rol de Ingreso Corte Suprema 4300-2014, de fecha 4 de Septiembre de 2014 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, y Lamberto Cisternas; **29.-**“Secuestro Calificado de Miguel Woodward”, Rol de Ingreso Corte Suprema 4240-2014, de fecha 30 de Septiembre de 2014 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller Sr. Haroldo Brito, y Lamberto Cisternas; **30.-** Episodio Londres 38, “Secuestro de María Cecilia Labrín”, Rol de Ingreso a la Corte Suprema 17037-2013 de fecha 8 de Octubre de 2014 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller Sr. Haroldo Brito, y Lamberto Cisternas; **31.-**Episodio Villa Grimaldi, “Secuestro de Carlos Guerrero Gutiérrez”, Rol de Ingreso a la Corte Suprema 4549-2014 de fecha 16 de Octubre de 2014 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Carlos Cerda; **32.-** Episodio Villa Grimaldi “Secuestro de Claudio Contreras Hernández”, Rol de Ingreso a la Corte Suprema 4550-2014 de fecha 16 de Octubre de 2014 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Carlos Cerda; **33.-**Episodio Endesa, Rol de Ingreso a la Corte Suprema 17030-2013 de fecha 22 de Octubre de 2014 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sra. Andrea Muñoz (minoría); **34.-** Episodio Villa Grimaldi, Homicidio de Ramón Martínez González, Rol de Ingreso a la Corte Suprema 21177-2014, de fecha 10 de Noviembre de 2014 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller Sr. Haroldo Brito, y Lamberto Cisternas; **35.-**“Secuestro calificado de Juan Maino, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo”, Rol 2931-2014, de fecha 13 de Noviembre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller Sr. Haroldo Brito, y Lamberto Cisternas; **36.-**“Secuestro calificado de Pedro Merino”, Rol 22266-2014, de fecha 15 de Diciembre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sra. Andrea Muñoz y Sr. Carlos Cerda; **37.-**“Homicidio de Heriberto Samuel Flores Müller”, Rol 11983-2014, de fecha



Foja: 1

23 de Diciembre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller Sr. Haroldo Brito, y Carlos Cerda; **38.-** Episodio Londres 38, “Secuestro de Juan Meneses Reyes”, Rol 11964- 2014, de fecha 12 de Enero de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, y Lamberto Cisternas; **39.-** Episodio “Marchigue” Homicidio de Néstor González Lorca, Rol 21971- 2014, de fecha 27 de Enero de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda; **40.-** Secuestro de Ruth Escobar Salinas, Rol 31425-2014, de fecha 30 de Enero de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller Sr. Haroldo Brito, y Lamberto Cisternas; **41.-** Secuestro de Sergio Ruiz Lazo, Rol 21589-2014, de fecha 10 de febrero de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas; **42.-** Secuestro de José Orlando Flores Araya y Rodolfo Valentín González, de fecha 26 de Febrero de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas; **43.-** Episodio Londres 38, Secuestro de Sergio Riveros Villavicencio, Rol 29214-2014, de fecha 13 de Marzo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda; **44.-** Episodio Londres 38, Secuestro de Agustín Reyes González, Rol 22652-2014, de fecha 31 de Marzo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda; **45.-** Episodio Los 8 de Valparaíso, Rol 20288-2014, de fecha 13 de Abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas; **46.-** Secuestro de Fernando Olivares Mori, Rol 22645-2014, de fecha 20 de Abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sra. María Eugenia Sandoval (minoría) y Sr. Lamberto Cisternas; **47.-** Secuestro de Carlos Sepúlveda Palavecino, Rol 23324-2014, de fecha 22 de Abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda; **48.** Meza con Fisco de Chile, Rol 23441-2014, de fecha 28 de Abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas; **49.-** Episodio Londres 38, Secuestro de Alfonso Chanfreau Oyarce Rol 24558-2015, de fecha 29 de Abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sra. Andrea Muñoz (minoría); **50.-** Episodio Londres 38, Secuestro de Gloria Lagos Nilsson, Rol 32161- 2014, de fecha 14 de Mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus; **51.-** Homicidio de Ana María Puga y Alejandro de la Barra, Rol 25656-2014, de fecha 19 de Mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Juan Eduardo Fuentes (minoría) y Sr. Lamberto Cisternas; **52.-** Aguirre con Fisco de Chile, Rol 23583-2014, de fecha 20 de Mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas y por el abogado integrante Sr. Jaime Rodríguez; **53.-** Becerra con Fisco de Chile, Rol 25671-2014, de fecha 20 de Mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrantes Sres. Jaime Rodríguez y Jorge Lagos (minoría); **54.-** Caballero con Fisco de Chile, Rol 25138-2014, de fecha 25 de Mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, y por el abogado integrantes Sres. Jaime Rodríguez y Jorge Lagos (minoría); **55.-** Episodio Londres 38, Secuestro de Máximo Gedda y Alejandro Parada,



Foja: 1

Rol 1665-2015, de fecha 25 de Mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas; **56.-** Leon con Fisco de Chile, Rol 29567-2014, de fecha 20 de Julio de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas; **57.-** Pugin con Fisco de Chile, Rol 4526-2015, de fecha 20 de Julio de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y por el fiscal Judicial Juan Escobar; **58.-** Episodio Enzo Muñoz y Ana Alicia Delgado Tapia, Rol 27178-2014, de fecha 4 de Agosto de 2015 pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Ricardo Blanco y Sra. Andrea Muñoz; **59.-** Secuestro de “José Salazar Aguilera”, Rol 1116-2015, de fecha 17 de Agosto de 2015 pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Juan Eduardo Fuentes (minoría); **60.-** Secuestro de Alonso Lazo Rojas, Rol 29086-2015, de fecha 24 de Agosto de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas; **61.-** Episodio Coelemu, Rol 932-2015, de fecha 24 de Agosto de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas; **62.-** Episodio Academia de Guerra, Homicidio de Mario Lavanderos, Rol 3781-2015, de fecha 24 de Agosto de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas; **63.-** Episodio Carahue, Homicidio de Juan Segundo Cayul Tranamil. Rol 5706-2015, de fecha 22 de Septiembre de 2015, pronunciada por los Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sra. Andrea Muñoz; **64.-** Vasquez con Fisco de Chile, Rol 7735-2015, de fecha 13 de Octubre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y por los abogados integrantes Sr. Jean Pierre Matus y Sr. Jorge Lagos (minoría); **65.-** Homicidio de Juan Tralcal Huenchumán, Rol 7961-2015, de fecha 25 de Noviembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Julio Miranda y por los abogados integrantes Jaime Rodríguez y Carlos Pizarro; **66.-** Episodio Villa Grimaldi, Secuestros Calificados de Ramón Ascencio Subiabre, Abraham Ferruz López, Octavio Boettiger y Luis Quezada, Rol 30598-2015 de fecha 1 de Diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Aránguiz; **67.-** Episodio Villa Grimaldi, Secuestro de Germán Cortés Rodríguez, Rol 13154-2015, de fecha 3 de Diciembre de 2015 Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Manuel Valderrama; **68.-** Zúñiga con Fisco de Chile, Rol 11208-2015, de fecha 10 de Diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y por el abogado integrante Jean Pierre Matus; **69.-** Episodio “Caravana De La Muerte, Antofagasta”, Rol 31945-2014, de fecha 16 de Diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Carlos Aránguiz; **70.-** Candia con Fisco de Chile, Rol 9652-2015, de fecha 24 de Diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Manuel Valderrama; **71.-** Marccone con Fisco de Chile, Rol 22856-2015, de fecha 29 de Diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas; **72.-** Homicidio de José Miguel Vargas Valenzuela, Rol 8706-2015, de fecha 11 de Enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y por los abogados integrantes Rodrigo Correa y Jean Pierre Matus; **73.-** Gómez con Fisco de Chile, Rol 7741-2015, de fecha 11 de Enero de



Foja: 1

2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Manuel Valderrama y el abogado integrante Sr. Jaime Rodríguez;

74.- Monsalve con Fisco de Chile, Rol 13699-2015, de fecha 11 de Enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y el abogado integrante Sr. Rodrigo Correa (minoría);

75.- Guajardo con Fisco de Chile, Rol 10775-2015, de fecha 19 de Enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Jorge Dahm;

76.- Rojas con Fisco de Chile, Rol 13170-2015, de fecha 21 de Enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito y los abogados integrantes Sr. Jaime Rodríguez y Sr. Rodrigo Correa (minoría);

77.- Episodio Villa Grimaldi Cuaderno Principal, Rol 17887-2015, de fecha 21 de Enero de 2016 pronunciada por los Ministros Sr. Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm;

78.- Operación Colombo, Secuestro de Stalin Aguilera, Rol 9031-2015, de fecha 25 de Enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sra. Andrea Muñoz y Sr. Jorge Dahm;

79.- Caucoto con Fisco de Chile, Rol 37993-2015, de fecha 25 de Enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sres. Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;

80.- Secuestro de Luis Almonacid Dumenez, Rol 7399-2015, de fecha 28 de Enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y los abogados integrantes Sr. Jaime Rodríguez y Sr. Arturo Prado (minoría);

81.- Episodio Londres 38, Secuestro de Jaime Cádiz, Rol 17012-2015, de fecha 29 de Enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito y los abogados integrantes Sr. Jaime Rodríguez y Sr. Rodrigo Correa (minoría);

82.- Homicidio de Isidro Arias Colillán, Rol 15928-2016, de fecha 29 de Marzo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;

83.- Secuestro Calificado de Zenon Sáez Fuentes, Rol 3975-2016, de fecha 29 de Marzo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;

84. Secuestro Calificado de José Patricio León Gálvez, Rol 21031-2015, de fecha 12 de Mayo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Carlos Cerda y Sr. Manuel Valderrama;

85.-Homicidio de Raúl Muñoz Muñoz, Rol 14283-2015, de fecha 18 de Mayo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda;

86.-Episodio Población Irene Frei, Rol 2962-2016, de fecha 25 de Mayo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Jorge Dahm, y los abogados integrantes Sr. Jean Pierre Matus Acuña y Jorge Lagos Gatica (minoría);

87.-Aplicación de tormentos a Haydee Oberreuter, Rol 2962-2016, de fecha 25 de Mayo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Jorge Dahm, y los abogados integrantes Sr. Jean Pierre Matus Acuña y Jorge Lagos Gatica (minoría);

88.- Secuestro calificado de Luis Ibarra Durán, Rol 7803-2015, de fecha 25 de Mayo de 2016, Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller y el abogado integrante Arturo Prado (minoría);

89.-Montecinos con Fisco de Chile, Rol 14343-2016, de fecha 10 de Junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm y por el abogado integrante Jorge Lagos (minoría);

90.- Episodio Operación Colombo, Secuestro calificado de Modesto Segundo Espinoza Pozo y Roberto Enrique Aranda Romero, Rol 12192- 2015, de fecha 16 de Junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda;

91.- Secuestro Calificado de Artemio Gutiérrez, Javier Fuentealba y Abundio



Foja: 1

Contreras, Rol 11198-2015, de fecha 20 de Junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Juan Eduardo Fuentes (minoría) y Sr. Jorge Dahm; **92.-** Secuestro Calificado de Artur Hillrens Larrañaga, Rol 173-2016, de fecha 20 de Junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Juan Eduardo Fuentes (minoría) y Sr. Jorge Dahm; **93.-** Homicidio Calificado de Leandro Arratia Reyes, Rol 20567-2015, de fecha 21 de Junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **94.-** Homicidio Calificado de Ramón Zúñiga Sánchez, Rol 179-2016, de fecha 21 de Junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **95.-** Homicidio Calificado de Luis Romero Rosales, Rol 23568-2015, de fecha 21 de Junio de 2016 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **96.-** Homicidio Calificado de Domingo Antonio Urbina Díaz, Rol 9757-2015, de fecha 21 de Junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **97.-** Homicidios de Charles Horman y Frank Teruggi, Rol 20166-2015, de fecha 20 de Julio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm; **98.-** Episodio “Escuela de Artillería de Linares” Torturas de Belarmino Sepúlveda y otros, Rol 20580-2015, de fecha 21 de Julio de 2016 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **99.-** Episodio Jose Domingo Cañas, Secuestro de Manuel Villalobos Díaz” Rol 6886-2016, de fecha 21 de Julio de 2016. Pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Manuel Valderrama; **100.-** Episodio “Comando Conjunto, Secuestro de Juan Luis Quiñónes Ibaceta”, Rol 23572-2015, de fecha 2 de Agosto de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **101.-** Homicidio de Orlando Ponce, Rol 34165-2016, de fecha 2 de Agosto de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **102.-** Episodio Familia Gallardo, Rol 24290-2016, de fecha 8 de Agosto de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **103.-** Episodio Londres 38, Secuestro de Carlos Cubillos Gálvez, Rol 13762-2016, de fecha 17 de Agosto de 2016, pronunciada por los Ministros Sres. Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Jorge Dahm y por el abogado integrante Sr. Jaime Rodríguez; **104.-** Homicidio de Ricardo Ruz Zañartu, Rol 24288-2016, de fecha 5 de Septiembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **105.-;** Secuestros de Oscar Fetis Sabelle, Sergio Fetis Valenzuela, Luis Wall Cartes y Tomás Ramírez Orellana, Rol 24045-2015, de fecha 6 de Septiembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Juan Eduardo Fuentes, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **106.-** Secuestro de Mónica Llanca Iturra, Rol 7372-2016, de fecha 13 de Septiembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **107.-** Secuestro de José Ramírez Rosales, Rol 34057-2016, de fecha 6 de Octubre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm; **108.-** Secuestro y Homicidio de Vicente Atencio, Rol 28637-2016, de fecha 6 de Octubre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm; **109.-** Secuestro de Alejandro



Foja: 1

Villalobos Díaz, Rol 23573-2015, de fecha 13 de Octubre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **110.-** Homicidio de Hugo Araya y Marta Vallejos Buschman, Rol 22206- 2016, de fecha 13 de Octubre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **111.-** Secuestro de Marcelo Concha Bascuñán, Rol 44074-2016, de fecha 24 de Octubre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **112.-** Secuestro de José Calderón Ovalle, Rol 58917-2016, de fecha 7 de Noviembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **113.-** Secuestro de Jorge Ortiz Moraga, Rol 28641-2016, de fecha 8 de Noviembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Julio Miranda (suplente); **114.-** Homicidio de Guillermo Vallejos Ferdinand, Rol 34447-2016, de fecha 1 de Diciembre de 2016 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Manuel Valderrama y por el abogado integrante Jean Pierre Matus; **115.-** Homicidio de Manuel Flores Durán y Gerardo Osorio, Rol 15963- 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Manuel Valderrama; **116.-** Secuestro Calificado de Enrique Corvalán Valencia, Pedro Silva Bustos y Jorge Salgado Salinas, Rol 62032-2016 de fecha 14 de Noviembre, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y por el abogado integrante Jean Pierre Matus; **117.-** Secuestro Calificado de Héctor Vásquez Sepúlveda, de fecha 3 de enero de 2017, Rol 76273-2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **118.-** Episodio José Domingo Cañas, torturas Viviana Uribe, Gloria Laso y Otras, de fecha 23 de Enero de 2017, Rol 62211-2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama, Sr. Jorge Dahm y por la abogado integrante Sra. Rosa Leonor Etcheberry; **119.-** Episodio Los últimos 5 desaparecidos del 87, de fecha 21 de Marzo de 2017, Rol 8642-2015 pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Carlos Cerda, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm; **120.-** Episodio Caravana de la Muerte-Copiapó, de fecha 10 de Abril de 2017, Rol 62036-2916, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Jorge Dahm, y por los abogados integrantes Sr. Jaime Rodríguez y Sra. Rosa Leonor Etcheberry; **121.-** Hover con Fisco de Chile, de fecha 10 de Abril de 2017, Rol 68876-2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Manuel Valderrama y por el abogado integrante Sr. Rodrigo Correa (minoría); **122.-** Bagus con Fisco de Chile, de fecha 27 de Abril de 2017, Rol 92828-2016, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Jorge Dahm, y por el abogado integrante Sr. Jaime Rodríguez; **123.-** Episodio Chacaltana, Torturas Villa Grimaldi, de fecha 27 de Abril de 2017, Sr. Milton Juica, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Jorge Dahm y por el abogado integrante Sr. Jaime Rodríguez; **124.-** Homicidio de Augusto Carmona, de fecha 16 de Mayo de 2017, Rol 55213-2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **125.-** Homicidio de Claudio Pino Cortés, de fecha 6 de junio de 2017, Rol 87830-2017, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y por el abogado integrante Sr. Rodrigo Correa (minoría); **126.-** Tormen con Fisco, Rol 10439-2017 de fecha 12 de Junio de 2017, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **127.-** Secuestro de Rafael Araneda



Foja: 1

Yévenes, Rol 97856-2016, de fecha 3 de Julio de 2017, pronunciado por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm; **128.-**Homicidio Calificado de Rigoberto Achú Liendo y Absolon Wegner Millar, Rol 5989-2017, de fecha 18 de Julio de 2017, pronunciado por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; **129.-**Episodio Operación Colombo, Secuestro Calificado de Germán Moreno Fuenzalida, Rol 82511-2016 de fecha 9 de Agosto de 2017, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Haroldo Brito y por los abogados integrantes Sr. Jean Pierre Matus y Jorge Lagos; **130.-**Domic con Fisco, torturas Alejandro Domic Mihovilovic, Rol 34259-2017, de fecha 24 de Octubre de 2017, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm; **131.-**Episodio Paine-Collipeumo, Rol 1568-2017, de fecha 16 de Noviembre de 2017, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y por el abogado integrante Jean Pierre Matus; **132.-**Lara con Fisco de Chile, Rol 31711-2017, de fecha 23 de Enero de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Jorge Dahm; **133.-** Cancino con Fisco de Chile, Rol 2471-2018, de fecha 15 de Marzo de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Jorge Dahm; **134.-** Secuestro de Gregorio Palma Donoso, Rol 9345-2017, de fecha 21 de Marzo de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Manuel Valderrama y los abogados integrantes Sra. Leonor Etcheberry y Sr. Carlos Pizarro; **135.-** Secuestro de Raúl Cornejo Campos y Mario Maureira Vásquez, Rol 12258-2017, de fecha 28 de Marzo de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Manuel Valderrama y los abogados integrantes Sra. Leonor Etcheberry y Sr. Carlos Pizarro; **136.-** Homicidio de Juan Espinoza Parra, Rol 8154-2016, de fecha 28 de Marzo de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y los abogados integrantes Sr. Jean Pierre Matus y Sr. Rodrigo Correa (minoría); **137.-** González con Fisco de Chile, Rol 5117-2017, de fecha 13 de Junio de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Jorge Dahm; **138.-** Episodio “Lonquén” Rol 30170-2017, de fecha 18 de Junio, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Ricardo Blanco, Sra. Andrea Muñoz y Sr. Manuel Valderrama; **139.-** Episodio Operación Colombo “Secuestro de Luis Durán Rivas” Rol 38682-2017 de fecha 5 de Julio de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Manuel Valderrama, Jorge Dahm y el abogado integrante Jorge Lagos (minoría); **140.-** Episodio Colonia Dignidad “Secuestro de Álvaro Vallejos Villagrán” Rol 19127-2017, de fecha 6 de Agosto de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Jorge Dahm; **141.-** Homicidio de José Domingo Quiroz Opazo, Rol 33750-2017, de fecha 6 de Agosto de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas y por los abogado integrantes Leonor Etcheberry y Rodrigo Correa (minoría); **142.-** Homicidio Calificado de Iván Alfredo Quiroz Martínez, Rol 41554-2017, de fecha 6 de Agosto de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Jorge Dahm; **143.-** Bascur con Fisco de Chile, Rol 762-2018, de fecha 23 de Agosto, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Manuel Valderrama, Sr. Julio Miranda (S), Juan Manuel Muñoz Pardo (S) y la abogado integrante María Cristina Gajardo; **144.-** Secuestro de Bernardo Araya y María Olga Flores, Rol 36332- 2017, de fecha 4 de Septiembre de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos



Foja: 1

Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, y los abogados integrantes Leonor Etcheberry y Jorge Lagos (Minoría); **145.-** Almonacid con Fisco de Chile, Rol 19069-2018 de fecha 20 de Septiembre de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm; **146.-** Episodio Pisagua, Freddy Taberna y Otros, Rol 17010-2018, de fecha 20 de Septiembre de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm; **147.-** Homicidio de José Victoriano Martínez Rojas, Rol 16914-2018, de fecha 20 de Septiembre de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm; **148.-** Hernández con Fisco (torturas), Rol 19301-2018, de fecha 28 de Septiembre de 2018 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Jorge Dahm; **149.-** Homicidios de Jorge Oyarzún Escobar, José Sergio Muñoz González y Juan Escobar Camus, Rol 43113-2017, de fecha 4 de Octubre de 2018 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Lamberto Cisternas, Sra. Andrea Muñoz, Sr. Carlos Cerda y Sr. Jorge Dahm; **150.-** Homicidio de Blanca Carrasco Peña, Rol 43142-2017, de fecha 11 de Octubre de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Manuel Valderrama y los abogados integrantes Sra. Leonor Etcheberry y Sr. Diego Munita; **151.-** Torturas Eva Palominos y Patricia Zúñiga, Rol 40168-2017, de fecha 18 de Octubre de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Manuel Valderrama, Sr. Jorge Dahm y al abogado integrante Sr. Jorge Lagos (minoría); **152.** Homicidio de José Luis Baeza Cruces y Otros. Episodio Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, Rol 39628-2017, de fecha 31 de Octubre de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm; **153.-** Homicidio de José Espinoza Santic, Rol 1231-2018, de fecha 21 de Noviembre de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Manuel Valderrama, Sr. Jorge Dahm, Sra. Angela Vivanco y por el abogado integrante y Sr. Diego Munita; **154.-** Ramírez con Fisco de Chile, Rol 26746-2018, de fecha 6 de Diciembre de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y por los abogados integrantes Sr. Iñigo De la Maza y Sr. Antonio Barra; **155.-** Pinochet con Fisco de Chile, Rol 29934-2018, de fecha 5 de Diciembre de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama, Sr. Rodrigo Biel (S) y por el abogado integrante Sr. Antonio Barra; **156.-** Episodio Operación Colombo, Secuestro de Felix Lebrecht, Rol 38766-2017, de fecha 11 de Diciembre de 2018 pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y por el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus; **157.** Soto Lastra con Fisco de Chile, Rol 15298-2018, de fecha 24 de Diciembre de 2018, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm; **158.-** Muñoz con Fisco de Chile, Rol 15034-2018, de fecha 28 de Enero de 2019, pronunciada por Los ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Jorge Dahm, por los abogados integrantes Sr. Antonio Barra y Sra. María Cristina Gajardo; **159.-** D'Orival con Fisco, Rol 8106-2018, de fecha 29 de Enero de 2019, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Rodrigo Biel y por los abogados integrantes Sr. Ricardo Abuabud y María Cristina Gajardo; **160.** Morales con Fisco, Rol 12636-2018, de fecha 29 de Enero de 2019, pronunciada por Los ministros Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Jorge Dahm, por los abogados integrantes Sr. Antonio Barra y Sra. María Cristina Gajardo; **161-** Salinas con Fisco, Rol 12715-2018, de fecha 6 de Febrero de 2019, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Rodrigo Biehl, y por los abogados integrantes



Foja: 1

Sr. Antonio Barra y Sra. María Cristina Gajardo; **162.** Meza con Fisco, Rol 3363-2019, de fecha 21 de Febrero de 2019, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Manuel Valderrama, Sr. Jorge Dham y por el abogado integrante Sr. Antonio Barra; **163.** Caucoto con Fisco, Rol 15402-2018, de fecha 21 de Febrero de 2019, pronunciada por Los ministros Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Rodrigo Biehl, por los abogados integrantes Sr. Antonio Barra y Sr. Diego Munita; **164.** Fernández con Fisco, Rol 31363-2018, de fecha 26 de Febrero de 2019, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama, Sr. Juan Manuel Muñoz Pardo y por el abogado integrante Sr. Antonio Barra; **165.** Pozo con Fisco, Rol 29944-2018, de fecha 26 de Marzo de 2019, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dham; **166.** González con Fisco, Rol 29463-2018, de fecha 26 de Marzo de 2019, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dham; **167.** Episodio Operación Colombo “Secuestro Calificado de Miguel Ángel Acuña Castillo”, Rol 2458-2018, de fecha 25 de Julio de 2019, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Manuel Valderrama, Sr. Jorge Dham y Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuabud; **168.** Agurto con Fisco, Rol 31272-2018, de fecha 28 de Agosto de 2019, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Jorge Dham y Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos (minoría); **169.** Aldoney con Fisco, Rol 14903-2019, de fecha 4 de Noviembre de 2019, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Arturo Prado y los abogados integrantes Sra. Leonor Etcheberry y Sra. María Cristina Gajardo; **170.** Del Canto con Fisco, Rol 15633-2019, de fecha 5 de Noviembre de 2019, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dham.

Señala que en el presente caso, la reparación a su representado pasaría por el hecho que la judicatura interna acogiese la acción civil incoada con ese propósito. Ésta es la única conclusión a la que se puede arribar si se considera que los hechos que dan vida a esta demanda son, precisamente, las actuaciones ilícitas cometidas por el Estado de Chile en contra de la vida, integridad física y libertad ambulatoria de la víctima.

El daño provocado y el monto de la indemnización.

En este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima, cometida en contra de la persona de la víctima, que como detenido político y torturado le ha tocado soportar. Esto es indudablemente un daño moral, el cual, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado a través de una indemnización.

Su parte entiende por daño moral aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico.

Esta forma de conceptualizar el daño moral es consistente con los sentidos dados por la doctrina chilena y la jurisprudencia (nacional e internacional), tal como pasa a indicar.

Comienza por una revisión de la doctrinal nacional, citando a don Arturo Alessandri quien definió el daño moral como “*el dolor, pesar o molestia que sufre una*



Foja: 1

persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida". El mismo autor sostiene que el daño moral se identifica con la expresión *"el precio del dolor"*. Según este catedrático el carácter indemnizable del daño moral no cumple sólo una función reparatoria, (ya que daños como los que han sufrido son invaluable, irreparables) sino también compensatoria, ya que la indemnización del daño moral pretende hacer de nuevo la vida más liviana a quien ha soportado una dura carga, y utiliza para ello la expresión *"las penas con pan, son menos"*. Cabría agregar que la doctrina más moderna –se piensa aquí en autores como don José Luís Díez y don Ramón Domínguez Águila- ha expandido el concepto de daño moral a *"una lesión de cualquier interés cierto y legítimo de la víctima de contenido no patrimonial"*.

Por su parte, las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de justicia tienden a definir el daño moral como *"aquél que lesiona un derecho extramatrimonial de la víctima"*, junto con afirmar que *"es la lesión o agravio, efectuado dolosa o culpablemente, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a otro hombre"* (I. Corte de Apelaciones de Santiago, 13 de Marzo de 1985, RDJ, Tomo LXXXII, sec. 2, página 6). En la misma dirección corren también aquellas sentencias que definen el daño moral como un conjunto de *"atentados a derechos personalísimos del ser humano que no tienen un contenido económico"* (I. Corte de Apelaciones de Santiago, 1 de Julio de 1997, RDJ, Tomo XCIV, sec. 2, página 79).

Ahora bien, respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado. Esto mismo, pero explicado mediante un ejemplo suena así: desde el momento cuando ya se tiene por probado que una persona perdió su vida, fue torturada, o vio lesionada su libertad individual o su seguridad personal por obra de agentes del Estado, entonces carece de sentido preguntarse en sede judicial si acaso los más cercanos a la víctima –piénsese, a modo ilustrativo, en su cónyuge, sus hijos o sus padres- habrán resultado ilesos en su fuero interno –sus afectos y emociones- luego de los delitos cometidos. Por eso es que para un sector importante del foro judicial al cual adhiere este libelo pretensor, basta que la víctima acredite la lesión de un bien jurídico personalísimo para que luego entonces se infiera -como consecuencia necesaria- el daño sufrido con ocasión del hecho ilícito cometido.

En este punto, estima pertinente recordar una antigua sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema de fecha el 8 de Noviembre de 1944- que declara que *"una de las razones que justifican en derecho la indemnización por el daño moral, es el efecto de la disminución de la capacidad de trabajo, la depresión de salud o de las energías, fenómenos naturales y ordinarios que, por ello, no necesitan ser especialmente probados, ya que la comprobación de su realidad va incluida en la existencia misma de la desgracia, que para el demandante -pariente cercano de la víctima- importa el delito o cuasidelito cometido en la persona de ésta"*, RDJ, Tomo XLII, sec. 1, página 392). En el mismo sentido se halla aquella otra sentencia, también dictada por el Máximo Tribunal (con fecha 28 de Junio de 1966) que, en atinente, establece que *"Probada la muerte de esos hijos en las trágicas circunstancias conocidas y el grado de parentesco, queda probado el daño"* (RDJ, Tomo LXIII, sec. 1, página 234).

En el mismo sentido ha fallado la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia del 9 de Agosto de 1960 (RDJ, Tomo LVII, sec. 4, página 229) y en fallo del 22 de Agosto de 1990. En esta última sentencia el Tribunal de Alzada de Santiago, en relación con la prueba del daño moral, señala que éste *"no requiere acreditación porque*



Foja: 1

es obvio el sufrimiento que a una madre le provoca el fallecimiento de su hijo, y en la especie se encuentra establecido el vínculo parental” (Gaceta Jurídica, N° 122, sec. 4, página 72) y más recientemente el 1 de Julio de 1997 (RDJ, Tomo XCIV, sec. 2, página 79).

Por su parte, la I. Corte de San Miguel ha mantenido un criterio similar al sentenciar que *“Las lesiones físicas y mentales a una persona producen un sufrimiento en ella misma y a los familiares más cercanos. Tal daño no requiere de prueba y en todo caso debe ser indemnizado por quien lo haya ocasionado, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos, debiendo hacerse al respecto una apreciación equitativa y razonable por el Tribunal”* (8 de Agosto de 1989, RDJ, Tomo LXXXVI, sec. 4, página 73.)

Ha sido idéntico el criterio al de la dogmática y la práctica judicial chilenas, se halla a nivel de la jurisprudencia internacional.

En la actualidad ya es jurisprudencia, constante y pacífica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. De hecho, en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos -tales como, las afectaciones a su derecho a la vida, o a la integridad personal o la libertad ambulatoria- no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido, toda vez que (dicho padecimiento) *“resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a tortura, agresiones y vejámenes (...) experimente dolores corporales y un profundo sufrimiento”* (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Moiwana”. Reparaciones. Sentencia de 15 de junio de 2002. Serie C N° 124. Párr. 195; “Caso Gómez Palomino”. Reparaciones. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C N° 136. Párr. 132; “Caso Blanco Romero y otros”. Reparaciones. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C N° 138. Párr. 132; “Caso Masacre de Mapiripán”. Reparaciones. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C N° 134. Párrs. 283 y siguientes; “Caso Masacre Pueblo Bello”. Reparaciones. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C N° 140. Párr. 255; “Caso López Álvarez”. Reparaciones. Sentencia de 1° de febrero de 2006. Serie C N° 1141. Párr. 201, letra b; “Caso Baldeón García”. Reparaciones. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C N° 147. Párr. 130).

Después de todo lo dicho hasta aquí, es comprensible que un demandante experimente cierta dificultad al momento de proponer ante la judicatura alguna cifra exacta que haga las veces de reparación integral del mal causado, porque es un daño verdaderamente irreparable. No obstante, los órganos encargados de la administración de justicia requieren de parte de quienes ejercen acciones legales que estos sean capaces, entre otras cosas, de expresar con claridad sus pretensiones y precisar de forma concreta las medidas de reparación a las que aspiran.

El daño moral se hace patente por sí mismo en atención a los hechos, es decir, salta a la vista de lo evidente que es. Las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, pérdidas de proyectos de vida, inseguridades, deben ser tomados en cuenta por los tribunales de justicia para determinar la existencia del daño y además, establecer el monto que se entiende justo para reparar dicho daño.

Para esto, respecto de este tipo de causas, donde existen víctimas sobrevivientes de un delito atroz como es la aplicación de tormentos, sufridos por una persona inocente, existen precedentes en nuestra jurisprudencia en cuanto a la posibilidad de



Foja: 1

accionar civilmente para obtener una reparación acorde al daño provocado, además de construir ciertos parámetros para determinar el monto a demandar.

Así las cosas, y solo a modo de ejemplo, en la causa “Valencia Oyarzo Eliecer Segundo con Fisco de Chile” se condenó al Fisco a pagar la suma de \$150.000.000 a víctimas sobrevivientes del centro de detención y tortura ubicado en la Isla Dawson. Respecto de esta causa, la Corte Suprema, en la resolución que no da lugar a la casación presentada por el Fisco, y que confirma la sentencia de primera instancia, planteó lo siguiente: *“Séptimo: Que, desde otra perspectiva, el resarcimiento del deterioro originado por el delito y la acción para hacerlo efectivo, de máxima transcendencia al momento de administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, todo lo cual condujo a acoger la acción civil formalizada en autos, cuyo objeto radica en la reparación íntegra de los detrimentos ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, y así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y en vigor, unidos a la leal interpretación de las disposiciones de derecho internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica mundial. Sus preceptos deben recibir aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo estatuido en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de carácter jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, y así acata la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados”* (Cfr. (Rol 803-2008 del 18° Juzgado Civil de Santiago y Rol 5270-2013 Corte de Apelaciones de Santiago y Rol 1092-2015 Corte Suprema).

La Corte Suprema resolvió, en definitiva, rechazar el recurso de casación en el fondo promovido por el Fisco de Chile, haciendo primar por sobre la normativa de orden civil y privado, los tratados internacionales que Chile ha ratificado y se encuentran en vigor, como ocurre con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros mencionados y analizados en los párrafos anteriores.

Por todo lo anteriormente expuesto, su parte solicita que se condene al Fisco de Chile al pago de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para el actor a título de indemnización por el daño moral que se le ha causado como consecuencia directa de su detención, prisión política y torturas a las que fue objeto, por obra de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que esta judicatura determine en justicia, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

SEGUNDO: Que el Fisco de Chile al comparecer, evacúa la contestación de la demanda, solicitando su completo rechazo conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas. En subsidio, solicita la rebaja sustancial del monto indemnizatorio pretendido.

En primer lugar efectúa una breve síntesis de la demanda y a continuación procede a indicar las excepciones, defensas y alegaciones, las que se detallaran a continuación.

I.- Primera Excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.



Foja: 1

Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas.

Señala que es necesario comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos para efectos de posiciones estas indemnizaciones dentro del panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior -y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada "Justicia Transicional". Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

En efecto, el denominado dilema "justicia versus paz" es, sin lugar a duda, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional (Sriram, Chandra Lekha, *Confronting Past Human Rights Violations*. New York, 2004, pp. 5). Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Por otro lado, hace presente que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Se debe recordar que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas (Greiff, Pablo de, ed. *The Handbook of Reparations*. Oxford, Oxford University Press, 2006, p.2).

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la ley N°19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño (Lira, Elizabeth; Loveman, Brian. *Políticas de reparación*. Chile 1990-2004. Santiago, LOM, 2005 p. 76).

La complejidad reparatoria.

Acude nuevamente a lo expresado por Elizabeth Lira, indicando los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron "*(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse*" (Lira, Elizabeth, *The Reparations Policy for Human Rights Violations in*



Foja: 1

Chile, en de Greiff, Pablo ed. The Handbook of Reparations, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 56).

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "*pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas*" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "*reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas*".

Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación: "*un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe*". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas". Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación "moral y patrimonial" buscada por el proyecto. La noción de reparación "por el dolor" de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal "de indemnización" y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la "responsabilidad extracontractual" del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover "la reparación del daño moral de las víctimas" a que se refiere el artículo 18.

Asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y; c) Reparaciones simbólicas.

Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del proceso de justicia transicional particular del país, el que busca la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

Reparación mediante transferencias directas de dinero.



Foja: 1

Diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Al respecto, le parece necesario destacar que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de: **a)** Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig); **b)** Pensiones: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); **c)** Bonos: la suma de \$ 41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992 y; **d)** Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-; **e)** Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 21.256.000.000.-. En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar. Como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Reparaciones específicas: Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos.

En lo tocante al caso concreto, señala que todos los demandantes han recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N°19.992 y sus modificaciones, la que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, cabe consignar que los actores recibieron en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000. De esta forma, conforme se acreditará en la etapa procesal pertinente, el demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas.



Foja: 1

Tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008. Rule of Law tools for post-conflicts states. Reparations programmes, New York, United Nations, p. 28).

En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad, cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.580.892.- Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos. Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda

Reparaciones simbólicas.



Foja: 1

Al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor -siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Así, Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, indica que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, *"pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) "Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida" y b) "Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo"* (Fueyo L., Fernando, Instituciones de Derecho Civil Moderno, Santiago, Ed. Jurídica, 1990, p. 52).

En esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: 1) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; 2) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido- desaparecido; 3) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos; 4) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; 5) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el "Memorial de los prisioneros de Pisagua" en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo "Para que nunca más" en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial "Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia" en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial "Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama" en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el "Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama" en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el "Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos" en la Plaza de Armas de Curacaví; el "Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista" en la sede de este partido; el "Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca" en esa ciudad; y el "Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas" en el Cementerio Municipal de esa ciudad;



Foja: 1

Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con la realidad económica del país, que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *"aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal"* (C Suprema., Domic Bezic, Maja y otros con Fisco [2002] Rol 4753-2001, Considerandos 28° a 34°).

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, en que reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que: *"DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: "Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley". De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiese gozar el respectivo beneficiario, de*



Foja: 1

manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien -como se dijo- percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos" (C. Suprema, Rivera Orellana, Flor y otros con Fisco de Chile, 30 de enero de 2013, Rol 4742-2012).

En el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente "*reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas*" (C. Suprema, Espinoza Figueroa y Rioseco Espinoza con Fisco de Chile, Rol 1963-2005; C. Santiago, Espinosa Olea con Fisco de Chile, Rol 2400-2002), lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

En efecto, cabe indicar que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Así, en el caso Almonacid se señaló expresamente que "*la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra párr. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$ 12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior -prosigue la sentencia- el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial...*" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, cons. 161).

En este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. Un documento denominado "*Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos*" (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial. Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el



Foja: 1

universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008 op. cit., p. 35).

En la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación (Lira, Elizabeth, op. Cit. 2006, p. 94).

En conclusión, estando la acción interpuesta en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, el demandante ya fue indemnizado a través de las leyes de reparación, por tal motivo opone formalmente la excepción de reparación integral, la que acreditará en la oportunidad procesal correspondiente.

II.- Segunda Excepción: Prescripción Extintiva.

Además, de la excepción anterior, indica que opone la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, según los argumentos que detallará a continuación.

Normas de prescripción aplicables.

Indica que la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios que interpone se funda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que se rechace la demanda en todas sus partes.

Alega que conforme al relato efectuado por la actora, la detención ilegal y tortura que sufrió, por los hechos ocurridos y hasta el mes de septiembre de 1973. En el caso concreto, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 23 de septiembre del 2020, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

En consecuencia, ratifica que la excepción de prescripción opuesta es la de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, señala que viene en oponer la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Generalidades sobre la prescripción.



Foja: 1

Por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. "*Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible*" (Alessandri, Somarriva y Vodanovic. Tratado de Las Obligaciones. Editorial Jurídica de Chile. 2- Ed. 2004. Volumen III. p. 181). Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Estima que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que "*para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad*" (C. Santiago, 08 de abril de 1982. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXXX, Sec. 2-, p. 38).

Hace presente que la prescripción es una institución universal y de orden público. Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: "*Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo*".

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión "igualmente" que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 2547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2494, inciso 1º, del Código Civil).

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Fundamento de la prescripción.

La prescripción tiene por fundamento dar firmeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Es de destacar que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la



Foja: 1

prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

No está demás decir que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

Jurisprudencia sobre la prescripción.

Señala que la Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó el día 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Al efecto, en relación a distintos puntos, procede a citar dicho fallo de la siguiente manera.

En relación al principio general que debe regir en materia de prescriptibilidad, cita lo siguiente: "*Octavo: Que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia*".

En cuanto a los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, señala que no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal y al efecto procede a citar lo siguiente: "*Cuarto: Que desde luego y en lo que dice relación con la alegación de vulneración de tratados internacionales cabe dejar establecido, en forma previa, que al tiempo de los hechos investigados no se encontraban vigentes en Chile el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sólo vino a ser aprobado por Decreto Supremo N° 778 (RR.EE.) de 30 de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989, ni la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, promulgada por Decreto Supremo N° 873 (RR.EE.), de 23 de agosto de 1990, publicado el 5 de enero de 1991 (...) "Quinto: Que no obstante lo anterior y en la misma línea de razonamientos acerca del contenido de tratados internacionales, previo es*



Foja: 1

también hacer notar que ninguno de los cuerpos normativos citados en el fallo impugnado establece la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la propia Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional. En efecto, el artículo 1° sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido. (...) Sexto: Que, por su parte, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades en que han incurrido por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que aluden a actos contra las personas o bienes citando al efecto homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del Convenio. (...) Séptimo: Que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal. En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados”.

Respecto a no existir una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, indica que debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. Así, junto a los considerandos, antes citado, reproduce considerando décimo que dice: "Décimo: Que de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto".

No obstante lo anterior, alega que el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. Las sentencias anteriores y posteriores fallo que se cita en este apartado, no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por su defensa y que solicita se tenga en especial consideración al momento de resolver el juicio, en



Foja: 1

conformidad al referido fallo de la Excma. Corte Suprema de fecha 21 de enero de 2013, que aplicó la institución de la prescripción en la materia de autos.

Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de estos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Así lo ha hecho presente la doctrina fiscal en sus diversas defensas y de la misma manera lo ha recogido reiteradamente la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado.

En tal sentido, estima que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Normas contenidas en el Derecho internacional.

Finalmente, aun cuando el demandante formula alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, su parte se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, declarando de antemano que ninguno de ellos contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

La "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema, que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

La Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada "Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad", se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la



Foja: 1

humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta Convención, destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile, ergo, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a los Tribunales nacionales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

El planteamiento de su defensa fiscal sobre prescripción ha sido reconocido por la Corte Suprema en la sentencia de fecha de 24 de julio de 2007 rol corte 1133-2006, caratulados "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile", que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas según se pasa a señalar: "*VIGESIMO QUINTO: Que, asimismo el recurso ha imputado a la sentencia que cuestiona haber transgredido, al aceptar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, diversas normas pertenecientes al Derecho Internacional de Derechos Humanos, que consagran la imprescriptibilidad en materias relativas a la protección de estos derechos, mencionado, a tal efecto, en primer término, el ordenamiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- promulgado mediante Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991. (...) VIGÉSIMO SEXTO: Que semejante reproche aparece desprovisto de fundamentación atendible, puesto que, si bien dicho tratado tiene la fuerza normativa que le reconoce el artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, su vigencia arranca de una época posterior en el tiempo a aquella en que ocurrieron los hechos objeto del actual juzgamiento, de modo que sus disposiciones no les resultan aplicables. Por lo que toca específicamente al artículo 63 - única disposición del Pacto que el recurso presenta como vulnerada - basta una somera lectura de su texto para comprender que en él se plasma una norma imperativamente dirigida a la Corte Internacional de Derechos Humanos, y que ninguna correspondencia guarda con la materia comprendida en el recurso".*

Lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa "Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile", autos ingreso N° 4067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007. En el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema.

No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, estima que



Foja: 1

el Tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Alegación sobre el daño e indemnización reclamada.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procede a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Fijación de la indemnización por daño moral.

Hace presente no puede dejar de considerarse que el daño moral consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Al respecto, la Excma. Corte Suprema ha señalado: "*Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido*" (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXX, Sec. 4a. pág. 61). En la perspectiva antes indicada, estima que la regulación del monto de la indemnización debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades. No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago (Diez Schwerter, José Luis. El Daño Extracontractual. Jurisprudencia y Doctrina. Editorial Jurídica de Chile, año 1998, pág. 256). En tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.



Foja: 1

En tal sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto que para fijar el quantum debe acudirse al Principio de Prudencia que conduce a la proporcionalidad. En efecto, en la sentencia de segunda instancia dictada en recurso de apelación Ingreso Corte 6891 - 2013, la I. Corte de Apelaciones de Santiago resolvió: *"Cuarto: Que ante tales argumentos, surge el problema de determinar la real cuantía de dicho daño moral, que como se ha dicho no se puede desconocer, su existencia en el caso, pero si bien, tal actividad se dificulta, por la generalidad de los hechos expuestos en la demandada, sin que se haya precisado cada uno de ellos y la total extensión del perjuicio - lo que permitiría efectuar algún grado de distinción o diferenciación- esta situación no puede ser óbice para alcanzarlo, por lo que se ha de recurrir a la prudencia, la que nunca debe ser desproporcionada, por lo que ésta Corte fijará la cuantía de tal reparación en \$3.000.000 para cada uno de los actores referidos en el considerando vigésimo sexto".*

Excepción subsidiaria de consideración de los pagos ya recibidos del Estado y que guarden armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En subsidio de las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva de las acciones deducidas, alega que la fijación del daño moral por los hechos de autos, se debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Además, estima pertinente hacer presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada.

Hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

A la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.



Foja: 1

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

La jurisprudencia de los tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme, por ejemplo, en fallo que aparece en el Tomo 55, sección 1º, página 95, de la revista de Derecho y Jurisprudencia, *"En los juicios sobre indemnización (por responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda de cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio"*.

Por consiguiente, el hipotético caso que el Tribunal decida acoger la acción de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

TERCERO: Que la parte demandante, al evacuar el trámite de la réplica, reitera todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda. Acto seguido procede a la réplica de las excepciones, alegaciones, defensas impetradas por la parte contraria, en la forma que se detallarán a continuación.

Réplica a la excepción de 'reparación satisfactiva o integral', denominada también "excepción de pago", alegada por el Consejo de Defensa del Estado.

En relación a la excepción de 'reparación satisfactiva', señala que dicha excepción les parece errada porque en el mejor de los casos, los montos que otorgan las referidas leyes sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. En ningún caso dichas pensiones reparan íntegramente el dolor experimentado por nuestro mandante en su calidad de víctima directa de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales.

Con todo, nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que debería obtener, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible. Conforme con ello, es evidente que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada. Con todo, le parece bastante razonable que el Fisco reconozca por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a la víctima directa que representa. Por lo demás "los pagos" que realiza el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que más tarde alega.

El Fisco de Chile vuelca su mejor empeño interpretativo y argumentativo para sostener esta defensa, señalando que en la discusión de la Ley N°19.123, el objetivo de este tipo de normas quedó bastante claro. En diversas oportunidades por ejemplo, hace referencia a la reparación moral y patrimonial buscada por los redactores del proyecto. La noción de reparación por el dolor de las vidas perdidas, se encuentra en diversos pasajes de la discusión. También está presente, según el Fisco de Chile, la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal de indemnización y de reparación. En definitiva, explica que las diferentes leyes de reparación han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación.



Foja: 1

Teniendo en consideración los argumentos aludidos en el párrafo anterior, huelga replicar que la Ley N°19.123 que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2° establece que *“Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”*. La palabra promover no es sinónimo de reparar, y en el caso de su mandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece hasta el día de hoy, por las brutales torturas proferidas por agentes del Estado. El sentimiento de injusticia y de no haber sido compensado ni reparado ni indemnizado, subsiste intacto e irreductible hasta el día de hoy.

Si se hila más fino, la propia Ley 19123 no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24: *“La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*. Entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber mediado el pago de una pensión como ocurre en este caso concreto. En otras palabras, al no establecer la ley en comento incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión de reparación y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, de suyo es insostenible la excepción de reparación integral invocada por el Fisco de Chile.

Así también lo han entendido los tribunales superiores de Justicia en forma reiterada, tal como detallará más adelante. Entonces es de la opinión que no es posible que el demandado, con una interpretación bastante particular y cuestionable desde el punto de vista jurídico, trate de decir que en base a las leyes precitadas, las víctimas de violaciones a los derechos humanos estarían impedidas de demandar.

Comprueba lo anterior, lo sentenciado en la causa “Valencia Oyarzo Eliecer con Fisco de Chile”, en que se condenó al Fisco a pagar la suma de \$150.000.000 a víctimas sobrevivientes del centro de detención y tortura ubicado en la Isla Dawson (Rol Excma. Corte Suprema 1092-2015). Además de todos los casos en que ha sido demandado el Fisco de Chile, por los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, en que el demandado ha utilizado y utiliza esta misma excepción de reparación integral, como por ejemplo en el de Carmelo Soria, cuyos familiares si obtuvieron una indemnización independiente de ser beneficiarios del Informe Rettig. Lo mismo ocurre con el caso del abogado Sr. Julio Cabezas, el caso de la familia de Tucapel Jiménez, a quienes el Consejo de Defensa del Estado indemnizó con una cuantiosa suma pese a recibir los familiares la misma pensión Rettig. Casos también como el de la familia del ex Canciller Orlando Letelier o el de la señora Otilia Vargas (madre de 5 desaparecidos), incluso el acuerdo arribado con la familia del General Carlos Prats, vienen a confirmar que es perfectamente compatible una indemnización en conjunto con la reparación de los Informes Rettig y Valech. Si así no se entendiera, el Consejo de Defensa del Estado estaría haciendo discriminaciones que no se condicen con lo expresado en la Constitución o al menos se estaría contradiciendo en sus aseveraciones.

Así también lo ha entendido la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en forma reiterada; *“Finalmente la alegación de no proceder la indemnización reclamada por haberse otorgado la establecida en la Ley N° 19.123 debe ser rechazada, por cuanto es palmario que la dispuesta en tal cuerpo legal no obstante sus motivaciones y texto, es puramente asistencial, destinada sólo a establecer condiciones de sobrevivencia y no indemnizatorias”* (Corte de Apelaciones, Caso Montes con Fisco de Chile, 10 de julio 2007, Considerando 7°). En el mismo sentido se falla en el caso Carrasco con Fisco



Foja: 1

(Corte de Apelaciones de Santiago, caso Carrasco con Fisco de Chile, 10-07-2007, Rol 6715-2002, Considerando 8º). Igualmente se ha fallado recientemente por nuestra Corte, *“Que tampoco resulta pertinente la improcedencia de la acción intentada, en razón de haber sido ya indemnizada la demandante en conformidad a la Ley 19.123, toda vez que la propia ley en su artículo 1º señala que la pensión de reparación será compatible con toda otra de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”* (Corte de Apelaciones de Santiago, Caso “Jara con Fisco de Chile”, 23.09.2009 , Rol 2839-2008, considerando 10º). Siguiendo la misma línea argumentativa, se ha fallado lo siguiente; *“Que sobre la misma materia cabe tenerse presente que la bonificación y demás beneficios reconocidos por el Estado a los familiares de las personas detenidas desaparecidas mediante la Ley N° 19.123, otorgados en cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, son de naturaleza y finalidad especiales, y por ende no afectan ni imposibilitan acceder a la indemnización que se persigue en esta causa, ya que tiene como causa la perpetración de un delito”*. (C. Santiago, Caso “Vergara con Fisco de Chile”, 23.09.2009, Rol 2495- 2008).

Por su parte, la Excma. Corte Suprema de Justicia, desestimando las alegaciones del Estado de Chile, ha dicho, *“Que en cuanto a la alegación del Fisco de Chile para que se declare improcedente la indemnización por daño moral que se ha demandado en razón de que, de conformidad con la Ley N°19.123, los actores obtuvieron bonificación compensatoria, pensión mensual de reparación y otros beneficios sociales, los cuales, por los motivos que señala, serían incompatibles con toda otra indemnización, tal alegación debe ser igualmente rechazada, por cuanto la ley citada, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, concede pensión de reparación y otorga otros beneficios a los afectados, pero no establece de modo alguno tal incompatibilidad, sin que sea procedente suponer aquí, que la referida ley se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de los derechos humanos ante la evidencia de que las acciones para obtener aquello se encontrarían a la fecha prescritas. Se trata, en consecuencia, de dos formas distintas de reparación y que las asuma el Estado voluntariamente en aquel caso- no importa de modo alguno la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare, por los medios que autoriza la ley, su procedencia. Al efecto, el propio artículo 4º de la ley N°19.123, refiriéndose, en parte, a la naturaleza y objetivos de la misma, expresa que en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere haber A personas individuales. Si en el cumplimiento de sus funciones la Corporación tuviere conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito, deberá ponerlos, sin más trámite, en conocimiento de los Tribunales de Justicia”* (Corte Suprema, “Caso San Javier” Rol 4723-2007, considerando 14º).

A mayor abundamiento, la norma rectora establecida en el artículo 76 de La Constitución Política de La República, establece; *“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”*. En virtud de este artículo, el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la Carta Fundamental, ya que basarse en la Ley N°19.123, y muy especialmente en la Ley N°19.992 y sus modificaciones, para decir que el daño moral ya está reparado llevaría necesariamente a la conclusión de que el



Foja: 1

Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello es abiertamente inconstitucional.

Finalmente, si se aceptara la tesis Fiscal, el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, es decir el Estado de Chile, y le estaría vedado a las víctimas discutirlo. Claro está, que un razonamiento así es contrario a cualquier principio básico del Derecho.

Réplica contra la excepción de prescripción extintiva.

Al momento de responder sobre la excepción de prescripción extintiva, indica que le parece jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil.

Tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por los tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos, por cierto, a la Excelentísima Corte Suprema. En el caso “Caro con Fisco de Chile” la Corte Suprema da buena cuenta de ello: *“Que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad del Estado, si bien se encuentra consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, no indica cuál es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4° del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Esta disposición previene, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado”* (Corte Suprema, 19 de octubre del 2005, “Caro Silva con Fisco de Chile”, Rol 4004-2003, considerando 6°). En el mismo sentido, en el caso “Bustos con Fisco” la Corte Suprema ha dicho que: *“... si bien el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, reconoce el principio de la responsabilidad del Estado, no indica cual es la naturaleza de ésta, de suerte que para determinarla debe necesariamente remitirse a la ley y, en este sentido, el artículo 4° de la Ley N° 18.575 previene en general, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado”* (Corte Suprema, 26 de enero del 2005, “Bustos Riquelme con Fisco de Chile”, Rol 3354-2003, considerando 7°).

Basado en lo anterior, el demandado incurre en un error jurídico al sostener que este litigio se debe resolver haciendo uso de categorías propias del Derecho Privado. Para empezar, la argumentación invocada por la defensa fiscal resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la *“inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado”* basado en que “el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil en el Título XXXV, denominado De los Delitos y Cuasidelitos, artículos 2314 y siguientes”. Esta última alegación, resulta incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia



Foja: 1

de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla. Igualmente, dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo, ha requerido de esos mismos tribunales y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone, como es el caso sublite.

En este orden de ideas, la doctrina de los actos propios consiste simplemente en castigar como *“inadmisibile toda pretensión contradictoria con comportamientos observados anteriormente por el mismo sujeto que hace valer dicha pretensión”* (Pardo de Carvallo, Inés. La doctrina de los Actos Propios. Revista de Derechos de la U. Católica de Valparaíso XIV, 1991-1992. P. 67). En tal sentido ha fallado uniformemente nuestra Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades. Así ha sentenciado: *“Que al actuar de la forma que lo hicieron los ejecutados (...), es hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, importando un perjuicio en contra del acreedor, lo que no resulta aceptable, de acuerdo al principio acogido por este tribunal, por la doctrina, y que inspira además disposiciones como es la del artículo 1683 del Código Civil y otras de nuestra legislación, principio que recibe el nombre de teoría del acto propio. Se expresa en la forma latina venire cum factum non valet, lo que implica que no es lícito hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, y siempre que este cambio de conducta o comportamiento importe un perjuicio en contra de otro o sea contrario a la ley, las buenas costumbres o la buena fe”* (Corte Suprema. 20 de abril del 2004. Rol 3097-2003. Considerando N°4°).

Aun así, el demandado al contestar insiste en que el caso de autos estaría prescrito. Lo que no es efectivo, por las razones que a continuación enumera:

1) La acción constitucional, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del estado no establece plazo de prescripción (artículo 38° inciso 2° de la Constitución Política de la República).

2) El demandado no (re) conoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues insiste en sostener una interpretación antojadiza y/o reduccionista no solo de las leyes que componen el ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional de los Derechos Humanos, como se verá más adelante. De acuerdo con la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” es un error ignorar el hecho que ésta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes. Al respecto, basta tener a la vista el Art. 63 de la citada Convención junto con la enorme cantidad de jurisprudencia que, desde hace varios años, viene dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo. En nuestro medio ya existen precedentes jurisprudenciales que refuerzan esta misma idea. De hecho, la Corte de Apelaciones de Santiago ha sentenciado que *“cabe precisar que la fuente de la responsabilidad civil, tratándose de una violación a los derechos humanos, está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos. En efecto, de acuerdo con los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando ha habido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. A juicio de la Corte Interamericana, el artículo 63.1 de la Convención constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo han reconocido esta Corte (...) y*



Foja: 1

la jurisprudencia de otros tribunales (...)” (Caso Aloeboetoe y otros de 1993). En un fallo reciente, aplicando este criterio señala: “*Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de La Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación*” (Caso Trujillo Oroza, de 2002. En el mismo sentido: caso Cantoral Benavides, de 2001; caso Cesti Hurtado, de 2001; caso Villagrán Morales y otros, de 2001; caso Bámaca Velásquez, de 2002). En otras sentencias, la misma Corte ha manifestado: “*Es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado incluso una concepción general de derecho, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente*”. (Caso Velásquez Rodríguez, de 1989. En el mismo sentido, caso Godínez Cruz, de 1989. Asimismo, La Corte cita fallos de otros tribunales en que se ha sostenido la misma doctrina, dictados los años 1927, 1928 y 1949). La Corte también ha aclarado que el artículo 63.1 de La Convención no remite al derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de manera que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencia del derecho nacional, sino con independencia del mismo. (Caso Velásquez Rodríguez). De otra parte, se ha señalado que esta responsabilidad estatal surge sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente, lo cual resulta lógico ya que indudablemente una violación de derechos humanos, por su naturaleza, supone dolo o al menos culpa estatal. En este sentido refiere el juez Cançado Trindade: “*En mi entender, la responsabilidad internacional del Estado se compromete a partir del momento en que deja él de cumplir una obligación internacional, independientemente de la verificación de falla o culpa de su parte, y de la ocurrencia de un daño adicional. Más que una presunta actitud o falla psicológica de los agentes del poder público, lo que realmente es determinante es la conducta objetiva del Estado (la debida diligencia para evitar violaciones de los derechos humanos). Se puede, así, ciertamente llegar a la configuración de la responsabilidad objetiva o absoluta del Estado a partir de la violación de sus obligaciones internacionales convencionales en materia de protección de los derechos humanos. Sobre dicha responsabilidad objetiva reposa el deber de prevención* (Voto del Juez A. Cançado. Caso El Amparo. Corte de Apelaciones de Santiago, Caso Marfull. 18 de enero del 2006, rol 37.483-2004. Considerando 18°).

El sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas. Al respecto, la Iltrma. Corte de Apelaciones ha sentenciado recientemente en relación a la imprescriptibilidad de la acción civil en delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado que: “*la imprescriptibilidad señalada rige tanto para el ámbito de lo penal como de lo civil, puesto que carece de sentido, frente a la antedicha afirmación basada en el ius cogens, sostener la imprescriptibilidad para el primer ámbito y desestimarla para el segundo, aduciendo para ello que éste es patrimonial, así como también el derecho a la indemnización reclamada, y por lo mismo privada y renunciable*”. Y luego, continúa señalando “*Que la prescripción de la acción de que se trata no puede ser determinada a partir de las normas del derecho privado, que se refieren efectivamente a cuestiones patrimoniales, pues esas normas atienden a finalidades diferentes a aquellas que emanan del derecho internacional de los derechos humanos y del ius cogens, que importan obligaciones de respeto, de garantía y de promoción de esos derechos, así como la adopción de medidas para hacerlos efectivos*”.



Foja: 1

(Corte de Apelaciones de Santiago, 11 de mayo del año 2007, Caso “Reyes Gallardo con Fisco de Chile”, Rol 3505-2002. Considerandos 2º y 3º). Con todo, *“Tratándose de una violación de los derechos humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, y ello ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación que no lo considera por responder a criterios claramente ligados al interés privado, y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX”* (Corte de Apelaciones de Santiago, Caso “Carrasco con Fisco de Chile”, 10 de julio 2007 Rol 6715-2002).

Expresado lo anterior, no tiene dudas que la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento. En tal sentido, el profesor Carlos Ducci enseña que la interpretación estricta y/o restrictiva, que se funda en motivos lógicos o en el respeto a los derechos individuales, se aplica en primer término a las leyes penales, debiendo hacerse presente que la jurisprudencia ha dado el carácter de pena a las sanciones en general, más allá del campo estrictamente penal (Ducci, Carlos. Derecho Civil. Parte General. Editorial Jurídica de Chile. 4ª Ed. 2005. p. 94). La evidente naturaleza sancionatoria del instituto de la prescripción extintiva impide que esta sea aplicada por analogía, con mayor razón cuando su aplicación analógica se contrapone a los principios que informan tanto el Derecho Público en general y el Administrativo en particular, así como - y muy especialmente - los que subyacen en el Derecho Internacional de los Derechos humanos. En efecto, pretender integrar la ausencia de normativa que regule la prescripción extintiva en el caso sub lite mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común y supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, en tanto niega la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, así como la particularidad de las relaciones jurídicas que cada uno de tales estatutos regula: El Derecho Privado regula las relaciones desde un plano de igualdad con plena autonomía de las personas para obligarse y cuyo fin es el bien particular en tanto su objeto es el intercambio de bienes. El Código Civil es supletorio al Derecho Privado, al que orienta. El Derecho Público, en cambio, regula la relación de los particulares frente al Estado cuyo fin es el bien común basado en los principios de juridicidad y supremacía constitucional. Más aún, luego del advenimiento de la 2ª guerra mundial y la experiencia aciaga que significó el régimen nazi, surge fuertemente la necesidad de limitar el poder y arbitrariedad del Estado, modificando radicalmente la concepción de la soberanía estatal, limitando su ejercicio al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana dando vida al complejo normativo de los Derechos Humanos. De este modo, la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código Civil reconoce en su artículo 4º al estipular que las disposiciones particulares *“se aplicaran con preferencia a las de este Código”*.

En consecuencia, la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la



Foja: 1

disparidad de las situaciones que se busca regular: mientras el Código Civil regula relaciones de tipo contractual vinculada a un negocio común o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí se está frente a delitos de la mayor gravedad que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto. Así, al no existir una similitud en las situaciones fácticas no resulta viable la analogía que supone hechos de igual valor que implique iguales consecuencias jurídicas.

En resumen, estima que sería bueno es que la parte demandada sepa y acepte de una vez el principio jurídico mundialmente reconocido por todas las sociedades democráticas de que los delitos de Lesa Humanidad no prescriben, tanto en su investigación, en su sanción y en su reparación.

Finalmente cita otro pasaje de la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que acoge la imprescriptibilidad de la acción civil: *“Octavo: Que la cuestión de los derechos fundamentales constituye un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan de manera aislada, porque toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando se deja de aplicar la referida norma, se la vulnera, y también se infringe la del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de indemnización que ha sido invocado en estos autos. Noveno: Que el derecho de las víctimas y de sus familiares de recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Interno Chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5° de la Constitución Política de la República. Décimo: Que analizando ahora las normas aplicadas por el fallo impugnado, cabe señalar que no resultan atinentes las normas de Derecho Interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios en que se funda el fallo, al estar éstas reglas en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir una reparación correspondiente a víctimas y familiares de éstas, estatuto normativo internacional reconocido por Chile como se ha expuesto. Cabe recordar que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos no sólo por la Constitución Política sino también de los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva. Undécimo: Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo 2.497 señala que las reglas de prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de manifiesto”* (Excma. Corte Suprema, 08 de abril del 2010 “Ortega con Fisco” Rol 2080-2008).

Comentario en cuanto al derecho aplicable.

En cuanto al derecho aplicable, sobre el debate dogmático en relación a la naturaleza de la responsabilidad del Estado y el estatuto jurídico aplicable, su parte ya ha citado doctrina y jurisprudencia al respecto. El Fisco ha hecho lo propio. Estima que cualquier estatuto que se aplique llevará a la misma conclusión: la existencia de la



Foja: 1

responsabilidad del estado, por hechos que causan daño y en que los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar tales daños. En un Estado de Derecho real - y no aparente – el principio de la responsabilidad es de la esencia del mismo. Los daños causados por el Estado literalmente “se pagan”. Lo segundo que su parte desea señalar es que el derecho citado por las partes no es vinculante para el *juridisciente*. Este será el que soberanamente aplique el derecho al caso concreto. Ese derecho que se construye desde las normas constitucionales que conforman las bases de la institucionalidad hasta las legales. No se debe olvidar las normas internacionales vinculantes para el Estado de Chile a propósito del inciso 2º del artículo 5 de la Constitución Política.

Respuesta en relación a la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

En relación a la afirmación de la contraria, que la Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, si bien ello es cierto, la más reciente jurisprudencia del máximo tribunal nacional ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos concediendo así la correspondiente indemnización, de suerte que se permito reiterar la vasta jurisprudencia señalada en el escrito de demanda.

Comentario en relación con el monto demandado.

Finalmente, sobre el monto demandada, señala que la demanda indemnizatoria exige pretensiones concretas. No hay dinero que supla el dolor experimentado por su representado. Le parece de mal gusto tener que justificar el peso que se solicita, como de peor gusto cuestionarlo. Así, para responder por la alegación de la contraria sobre lo excesivo lo pedido, señala que se condene a “*la suma que SS. disponga*”.

CUARTO: Que la parte demandada, al momento de evacuar el trámite de la dúplica, vuelve a ratificar la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda de autos, las que da por expresamente reproducidas, solicitando el rechazo de la demanda.

En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva que ha opuesto, reitera lo señalado al contestar la demanda, en cuanto a que el daño moral ya ha sido indemnizado, por lo que procede se haga lugar a la excepción alegada. Insiste respecto al marco general de las reparaciones ya otorgadas, al esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por la demandante, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

Respecto a la excepción de prescripción de la acción deducida en este juicio, se reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” y que su parte transcribió en sus principales argumentos, en el escrito de contestación a la demanda. En dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil. En efecto, desde hace más de 10 años la Excma. Corte ha señalado reiteradamente que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. Que la aplicación de



Foja: 1

esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

También la Excm. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excm. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia.

Cabe destacar la sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema, con fecha 16 de marzo de 2016, donde, pronunciándose respecto a la excepción de pago y de prescripción, estableció: “**Quinto:** Que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial cuya finalidad es hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, de manera que como ha señalado esta Corte, no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue en atención a que la acción impetrada pertenece –como se ha dicho– al ámbito patrimonial. (...) **Sexto:** Que, en efecto, no existe norma internacional incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad declarada en la sentencia. Su artículo 1º sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido. (...) **Séptimo:** Que como se ha expresado por este tribunal en fallos de similar materia, la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a este asunto. (...) **Octavo:** Que nuestro Código Civil en el artículo 2497 preceptúa que: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”. (...) **Noveno:** Que de acuerdo a lo anterior, resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto. (...) **Décimo:** Que en autos la responsabilidad demandada se origina en las detenciones y posteriores torturas de que fueron víctimas los demandantes de autos, Joaquín Rifo Muñoz y Guillermo Carrasco Vera, en manos de funcionarios de Carabineros de la Segunda Comisaría de Temuco, sucesos que acaecieron el 17 de septiembre de 1973 y que se prolongaron durante trece y doce días, respectivamente. Tal como lo señaló el Tribunal Pleno de esta Corte en los autos Rol N° 10.665-2011, sólo a partir de la fecha del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación es que se podrá



Foja: 1

comenzar a contar el plazo de prescripción que establece el artículo 2332 del Código Civil, pues con anterioridad a esa época los titulares de la acción no estaban en condiciones de haberla ejercido por carecer de antecedentes relativos al hecho que generó el daño que se pretende resarcir. De manera que como lo ha dicho esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones conociendo de causas similares, el plazo de prescripción ha de contarse desde la fecha de la comisión del ilícito o, en su caso, desde el 11 de marzo de 1990, o desde la entrega del informe de la denominada Comisión Rettig, esto es, el 4 de marzo de 1991; así, a la fecha de notificación de la demanda, el 18 de marzo del año 2013, la acción civil derivada de los hechos que la fundan se encuentra prescrita. (...) **Undécimo:** Que al rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile los jueces del mérito incurrieron en el error de derecho que se les imputa, el que tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado por cuanto incidió en la decisión de hacer lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral interpuesta por los actores. (...) **Duodécimo:** Que no obstante que la conclusión anterior resulta ser suficiente para acoger el recurso de fondo que se estudia, cree necesario este tribunal reiterar lo expresado en la sentencia Rol N° 3603-2015 de esta misma Corte en lo concerniente a la vulneración de las disposiciones citadas de la Ley N° 19.992, en relación con los artículos 19 y 22 del Código Civil, en cuanto al decidir el fallo impugnado que es procedente hacer de cargo del Estado una nueva indemnización por daño moral, en circunstancias que este rubro había sido ya cubierto con los beneficios descritos en esa normativa, los jueces contravienen no sólo el contexto de las disposiciones que conforman la ley citada, sino que además y muy especialmente los términos vertidos en el Mensaje Presidencial con el que se inicia el Proyecto de Ley, que establece lo que denomina: “Pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que indica”. En efecto, en el Mensaje en referencia se hace expresa mención de integrar esta ley al conjunto de esfuerzos desplegados por el Estado, entre otros fines, “buscando establecer reparaciones para todos los sufrimientos generados en el pasado como el exilio y la exoneración”. En el mismo contexto, se indica en el Mensaje que en materia de reparación se propone una serie de medidas divididas en tres categorías, incluyendo en tercer lugar, entre las individuales, aquellas que intentan reparar el daño ocasionado, las que se expresan tanto en el ámbito jurídico como en el económico. (...) **Décimo tercero:** Que el artículo 4° de la Ley en estudio, N° 19.992, determinó claramente que la pensión reparatoria consagrada en esta normativa, es compatible con cualquiera otra pensión –por cierto no expresamente exceptuada- y, además, con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes, quedando de esta forma acotados los términos de la compatibilidad de la pensión de que trata la citada ley. En las circunstancias precedentemente descritas y delimitando el ámbito de los montos que el Estado está en condiciones de desembolsar con fines reparatorios por los daños sufridos a consecuencia de las violaciones de derechos humanos ya aludidas, no es posible entender que quede, después de ello, abierto un margen difuso y genérico para otro tipo de reparaciones, como se ha pretendido por la vía de la acción incoada en estos autos. Lo recién señalado se expresa precisamente en el contexto de ser un hecho indiscutido el que los actores son beneficiarios de la pensión contemplada en la Ley N° 19.992, por haber sido reconocidos como víctimas de violación a los derechos humanos y estar individualizados en el listado de prisioneros políticos y torturados que forman parte del Informe de la Comisión Valech. (...) **Décimo cuarto:** Que de lo precedentemente razonado no cabe sino concluir que si en la sentencia atacada por esta vía se ha estimado compatibles, la pensión reparatoria y beneficios de la Ley N° 19.992 con una acción indemnizatoria por daño moral, se ha incurrido, además, en error de derecho, por infracción de las normas de esta última ley, que han sido denunciadas como infringidas. (...) Y de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 764, 765, 785 y 805 del Código de



Foja: 1

Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por la demandada en lo principal de la presentación de fojas 319 en contra de la sentencia de dieciséis de junio de dos mil quince, escrita a fojas 313, la que por consiguiente es nula y se reemplaza por la que se dicta a continuación ”.

QUINTO: Que recibida la causa a prueba, se interpuso la parte demandada interpuso recurso de reposición, el que fue acogido, de modo que en definitiva, se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: “1. *Fecha y circunstancia de la detención y tortura de don Mario del Carmen Beltrán Herrera;* 2. *Participación culposa o dolosa de agentes del estado de la detención y tortura de don Mario del Carmen Beltrán Herrera;* 3. *Efectividad de que don Mario del Carmen Beltrán Herrera, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura, por informe emanado de algún órgano del Estado;* 4. *Efectividad que el demandante ha obtenido reparación del daño moral a través del pago de beneficios previstos en las leyes 19.123; 19.992, 20.784 y otras leyes de reparación señaladas en autos por la parte demandada;* 5. *Existencia del daño moral, hechos constitutivos del mismo”.*

SEXTO: Que la demandante, a fin de fundar sus dichos, ha rendido la siguiente prueba en los autos:

1.- Certificado de nacimiento del demandante, emitido con fecha 26 de marzo del año 2020.

2.- Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de fecha 2 de Diciembre de 2019 que certifica el hecho que el demandante se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I. Al certificado se adjunta página del informe en que se encuentra ubicado el nombre del demandante.

3. Informe Médico de fecha 06 de enero del 2020, elaborado por el Jefe Del Programa de Atención Integral de Salud (PRAIS), don Sebastián Jofré Contreras sobre el estado de salud del demandante.

4.- Copias de sentencias de la Excm. Corte Suprema, roles 1092-2015 y 8105-2018.

5.- Copia sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), de fecha 29 de noviembre del 2018, caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile.

6.- Certificado Médico, emitido por PRAIS, de fecha 21 de diciembre del 2020 sobre situación de salud del demandante.

SÉPTIMO: Que, en audiencia testimonial, ofrecida por la parte demandante, en audiencia de fecha 23 de septiembre del año 2022, se recibió la declaración de los siguientes testigos:

1.- **Don Aldo Iván Cerda Araneda**, profesor e ingeniero de ejecución mecánica, domiciliado en Capitán Orellana 90-A, depto. 11, comuna y ciudad de Concepción. Consultado sobre el punto cinco de prueba, señala que le consta que don Mario Beltrán, sufrió daño morales en varios aspectos, como daños psicológicos, físicos y de proyectos de vida, debido a todo el periodo de detención y prisión, y a las terribles torturas a las que fue sometido, Ello le trajo consecuencia como enfermedades mentales y problemas psicológicos. Respecto a su proyecto de vida, él era estudiante de la carrera de Ingeniería de Ejecución Mecánica, en la Universidad de Concepción, en la cual,



Foja: 1

llevaba rendido aproximadamente un 60% de su carrera, y fue expulsado de la Universidad, sin que después se le permitiera seguir estudiando durante el periodo de la Dictadura. Sin que se le permitiera estudiar en Chile, porque él se fue a Australia como exiliado político, lo que le significó indudablemente interrumpir sus relaciones sociales y familiares con sus más cercanos. En el aspecto de daños físicos, don Mario sufrió de lesiones en los hombros y en la planta de los pies, como producto de las torturas, al ser colgado de los brazos, y ser sometido a permanentes golpes en la planta de los pies. Además de no haber podido seguir estudiando, tuvo dificultades para encontrar trabajo en el país en que se exilió, en el cual, por tener una cultura y un idioma diferente, tuvo dificultades para adaptarse. En el aspecto familiar, como la gran mayoría de quienes “sufrimos” prisión política y tortura, él tuvo problemas con su familia, en especial con su esposa, lo que le significó, tener que divorciarse o separarse. Indica que todo ello le consta porque con el demandante eran compañeros de Universidad, de carrera, y de varios ramos, en el momento de los hechos, de la detención, año 1974, y además, él (testigo) también fue detenido en los mismos días, como también, varios compañeros de carrera y de Universidad, y estuvieron gran parte del periodo de prisión y tortura, juntos. Efectuadas las repreguntas, aclara que el daño psicológico a don Mario Beltrán se ha manifestado porque ha debido estar 20 años con tratamiento psicológico y psiquiátrico o quizás más. En varias oportunidades lo encontraron esporádicamente muy “bajoneado” manifestando desesperación por no tener un proyecto de vida, no saber qué hacer en adelante, y que proyecto que comenzaba le salía mal. Precisa que el demandante estuvo en el exilio unos 20 años, no tiene claridad cuántos años fueron exactamente.

2.- Don Hugo Sergio Fuentes Espinoza, profesor de Estado, domiciliado en Av. Vicuña Mackenna 10197, comuna de La Florida, ciudad Santiago. Se efectúa preguntas al testigo en relación al quinto punto de prueba. Al efecto, señala que Mario sufrió a raíz de la detención, cree que fue en la Universidad de Concepción, supo que fue detenido por carabineros y fue llevado a una comisaría, no sabe en qué lugar de Concepción, supo que fue brutalmente golpeado por funcionarios policiales durante unos 20 minutos aproximados, y finalmente un Oficial, le golpeó en la planta de los pies con una regla metálica, hasta quedar insensibilizado de sus piernas, lo que no le permitía sostenerse en pie. Ese fue un episodio lo que supo de él, por referencias por supuesto. Otro episodio que causó daño moral también, fue el hecho de que lo colgaran de los brazos, y lo levantarán a través de un tipo de roldana, para mantenerlo en el aire y golpearlo en su estómago. Posteriormente, supo que perdió un riñón, y puede haber sido a causa de estos golpes brutales que recibió en estas torturas. Otro episodio que también supo, que debe haber causado un daño moral en él también, fue que cuando se le trasladó a la Isla Quiriquina, y se le mandó a correr, para que escapara, se fugara, y un compañero detenido de él, lo sujetó para que no corriera, y no fuera baleado en ese lugar, por lo tanto, se evitó su muerte en el fondo, que era el objetivo al hacerlo correr. Supo después, que una vez liberado, fue seguido en la calle, frecuentemente por Agentes de Seguridad, lo que no le permitía estar tranquilo en ningún lugar. Finalmente, supo que se fue al extranjero, al país de Australia, donde pudo hacer su vida. Indica que todo lo declarado lo sabe por referencias de su hermano, quién lo conoce un poco más, él también lo conoce porque lo visita cada cierto tiempo. Señala que todos ellos viven en Curicó y se conocen desde la época del Liceo, desde 1970 aproximadamente.

3.- Don Rafael Arturo Fuentes Espinoza, ingeniero mecánico, domiciliado en Loreley N°1736, comuna de la Reina, ciudad de Santiago, quién consultado sobre el punto cinco de prueba, señala que compartió con el demandante y otras personas en Concepción, en una casa con muchas piezas. Allanaron esta residencia y él venía con



Foja: 1

efectivos de Investigaciones, a allanar la vivienda, a investigar o a buscar alguna prueba que lo imputara, se le veía muy mal, muy demacrado, muy afectado, y después de eso, detuvieron a dos o tres personas que estaban ahí (entre ellos el mismo testigo), y los llevaron al cuartel de Investigaciones. No supieron más de él, ni de su familia, que fue la que llegó allá a preguntar por él, hasta que se supo, después de seis meses aproximadamente, que estaba en la cárcel de Concepción. Allá lo fueron a ver, donde estaba muy deprimido, cansado, trataba de disimular, muy nervioso, muy aterrorizado, y era otra persona, claramente ya no era el hombre alegre y conversador que habían conocido, estaba muy amargado, se le veía muy afectado, tampoco muy abierto a conversar sobre lo que le había pasado, es decir, la tortura, malos tratos y golpes que había recibido. Posteriormente, pasados los años, tiene que haber sido en los años dos mil, que se fue del país, y después volvió de paso, estuvo incluso trabajando por poco y corto periodo, y en esas ocasiones, lo vio en una o dos ocasiones, donde se pudo enterar, con más detalle lo que había pasado con él, ahí le contó las vejaciones que sufrió. Primero, lo detuvo carabineros, quienes lo golpearon, lo maltrataron más de un carabinero, de ahí, lo pasaron a la Policía de Investigaciones, quienes lo torturaron colgándolo con los brazos amarrados a la espalda, lo levantaban y lo bajaban, lo golpeaban en diferentes partes del cuerpo. De ahí, lo pasaron a la Base Naval, donde repitieron las mismas torturas y vejaciones. Ahora recuerda que también lo hacían sofocarse, lo ahogaban, y posteriormente, lo trasladaron a la Isla Quiriquina, donde también sufrió torturas, similares a las anteriores, y estos simulacros de fuga que hacían, para tomar alguna medida en su contra. Posteriormente, de la Isla Quiriquina pasó a la cárcel de Concepción. Todos estos relatos, que se enteró en conversaciones que tuvieron las veces que se encontraron, pudo observar que él se desconectaba de las conversaciones, se ponía muy retraído, mostrando mucha tristeza, al borde del llanto, se notaba mucho dolor en su relato, y se declaraba infeliz, no una persona contenta de vivir, estaba y está muy afectado todavía, porque frente a su familia, a sus seres queridos, sus hermanos particularmente, se ve afectado en el sentido que no ha superado una cosa que lo marcó tanto, y está afectado por no haber podido seguir estudiando, tuvo mucha inestabilidad en los trabajos, y siente culpabilidad de no superarlo. De las cosas que también le afectó, fue la separación de su señora y que forma parte de esta no superación. Ahora, desde el punto de vista físico, ha tenido problemas que le han perdurado en el tiempo, un dolor de hombros producto de los colgamientos que sufrió, y tiene otras dolencias que ahora no recuerda, pero ese es el que ha sido como un dolor crónico. Hacer presente, que no es el hombre que yo conocí, es un hombre triste y sufriente. Efectuada las repreguntas, aclara que conoce al demandante hace 50 años o más, desde allá en los años setenta.

OCTAVO: Que la parte demandada no obstante haber comparecido, no rindió prueba documental, ni testimonial. Sin embargo, solicitó y tramitó oficio ante el Instituto de Previsión Social.

NOVENO: Que a folio 49 del cuaderno principal, se tuvo por incorporado al proceso oficio N°4792/8986 del Instituto de Previsión Social (IPS) de fecha 09 de septiembre del año 2022, que informa que don Mario del Carmen Beltrán Herrera, en su calidad de víctima de prisión política y tortura, recibe beneficios por la Ley N°19.972, bono único por la Ley N°20.374, más aguinaldos.

DÉCIMO: Que previo a pronunciarse el Tribunal sobre las diversas alegaciones de las partes, resulta fundamental señalar que el caso de marras versa sobre indemnización de perjuicios reclamada al Estado de Chile, a partir de violaciones a los derechos humanos en la comisión de delitos denominados de lesa humanidad o crímenes



Foja: 1

de guerra, cometidos por agentes del estado en su representación y financiados por este, cuyas actuaciones son reconocidas a partir del informe emitido por la Comisión Valech.

UNDÉCIMO: Que a partir de lo anterior, el Estado de Chile efectuó un reconocimiento de la comisión de estos ilícitos a través de la Comisión ya nombrada.

La responsabilidad estatal versa en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º de la Constitución Política de la República, conformes a los cuales el Estado de Chile se encuentra limitado por el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, recogiendo y aplicándose entonces lo preceptuado por el artículo 38 de la Constitución Política y el artículo 4º de la Ley 18.575, como el derecho de toda víctima a ser reparada en los daños causado *“el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado”*, principios y derechos refrendados en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la materia.

DUODÉCIMO: Que, si bien la responsabilidad del Estado se funda en los artículos citados, la integración de instrumentos Internacionales que versan sobre Derechos Humanos al ordenamiento jurídico nacional, a través del artículo 5º inciso segundo de la Constitución Política, impide al Estado aplicar el derecho interno con el fin de eludir su responsabilidad, debiendo reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por tratarse dicha reparación de un derecho fundamental que por su naturaleza, la acción que pretende su resarcimiento, es imprescriptible. Ya lo señala la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema: *“A mayor abundamiento, se señala que el artículo 5.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos; y si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial, obedece a su índole humanitaria, en protección a los derechos humanos, reconocidos en la norma internacional citada, que primea sobre la preceptiva de derecho interno, en especial el artículo 2497 del Código Civil”*. (Fallo Rol C-2289-2015, 29 de marzo de 2016).

DÉCIMO TERCERO: Que en cuanto a la excepción de reparación satisfactiva opuesta por la demandada, indicando que el actor es beneficiario de las prestaciones ideadas por el Estado a través de la Ley 19.922 y en razón de ello ya existe una reparación del daño, esta sentenciadora considera que la calidad de víctima no es excluyente de la pretensión indemnizatoria de la presente acción, toda vez que las medidas de las leyes indicadas fueron creadas de forma general sin consideración a cada caso en particular, sin poder presumir que el Estado a través de dichas efectuará una reparación íntegra del daño causado.

Que a mayor abundamiento, que el Estado asuma su participación y colaboración en los hechos y pretenda el cumplimiento del deber de resarcimiento para con las víctimas, no importa para ellas la renuncia de sus formas, ni exclusión de otras medidas de reparación.

DÉCIMO CUARTO: Que sobre la excepción de prescripción de la acción invocada por la demandada, dicha solicita la aplicación de las normas del Código Civil en virtud de justificar la existencia de ésta a fin de otorgar certeza de las relaciones jurídicas, el resguardo del patrimonio y la libre circulación de los bienes, no obstante, imperativo resulta señalar que la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema ha reiterado que en el caso de delitos de lesa humanidad, la acción penal es imprescriptible, resultando contradictorio y poco coherente que la acción civil no siguiera este mismo razonamiento.



Foja: 1

Lo anterior resulta comprensible a partir de que el hecho lesivo consiste en un crimen de guerra o delito de lesa humanidad, especialmente contenido en el artículo 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, convenciones internacionales que Chile ha ratificado y que son parte integrante del ordenamiento jurídico nacional por remisión directa y expresa del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO QUINTO: Que la Comisión Verdad y Reconciliación, creada por el Decreto Supremo N°355 de 1990, del Ministerio de Justicia tuvo por objeto, conforme a su artículo 1°: *"...contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años"*, procurando en cumplimiento de dicho cometido, establecer un cuadro lo más completo posible sobre los hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias.

A su vez, la ley N° 19.123, creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, con el objeto de coordinar, ejecutar y promover las acciones necesarias en cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, correspondiéndole esencialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas.

Por Decreto N°1040, de fecha 26 de septiembre de 2003, se dispone la creación de la Comisión Valech, que tendría la finalidad de asesorar a la presidencia de aquel entonces y suplir información faltante y deficiencias de la Comisión Rettig, que solo contemplaba quienes habían muerto a manos de agentes del estado durante el período de dictadura militar, incluyéndose ahora los casos de prisión y tortura que no fueron contenidas en el informe anterior.

El informe Valech contiene la nómina de víctimas establecida por la Comisión y ha servido de base a los beneficios dispuestos por la Ley N° 19.992.

En el certificado del Instituto de Derechos Humanos (INDH), queda acreditado que el demandante don Mario del Carmen Beltrán Herrera figura en la nómina de víctima de prisión política y tortura, bajo el número 1059, siendo por tanto declarada víctima de violaciones a los Derechos Humanos.

DÉCIMO SEXTO: Que según la jurisprudencia y doctrina, en un sentido casi unánime, señala que la acción penal resulta imprescriptible, no resultando aplicable las normas civiles de prescripción de la acción, por resultar contrario al sistema Internacional de los Derechos Humanos, entendiéndose integrados a nuestro Ordenamiento Jurídico por remisión directa y expresa del artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República, asumiendo por ello el Estado chileno la obligación de instaurar el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a la reparación de todos los males experimentados como consecuencia del acto ilícito. Que a esto es lo indicado en el artículo 1° de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad, que establece que estos delitos son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que resulta fundamental para un estado de derecho democrático otorgar un tratamiento especial a los casos de crímenes de lesa humanidad en los que tuvo participación y activa colaboración del Estado, aplicándose a este una prolongación en el deber de reparación integral de las víctimas.



Foja: 1

DÉCIMO OCTAVO: Que a lo anterior, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, señala en su artículo 29 que las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una quiera de las infracciones graves y deber hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones provistas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes. Cada Parte Contratante tomar las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio. A su vez, el artículo 130 expresa que *“Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atacar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio”*; y el artículo 131 establece *“Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma y otra parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior”*.

DÉCIMO NOVENO: Que la demanda efectuada en contra del Fisco tiene asidero en los ejes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, encontrándose Chile suscrito a dichos, obligándose al reconocimiento y completa protección al derecho de íntegra reparación de los daños provenientes de estos delitos.

VIGÉSIMO: Que bajo este prisma de protección y aplicación del derecho internacional, no es aceptable el cuestionamiento a la aplicación normativa que verse sobre Derechos Humanos, y menos aquellas que ordenan la reparación por parte de los Estados, bajo el argumento de la protección del derecho interno, por cuanto se compromete la responsabilidad del Estado de Chile, de los acuerdos y tratados internacionales que ha ratificado, así como el principio de buena fe comprometido con las normas *Ius Cogens* o costumbre del Derecho Internacional.

Que, a esto, la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, indica en su artículo 27 en cuanto al derecho interno y la observancia de los tratados, que Una Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entender sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, razones suficientes para rechazar las excepciones de reparación satisfactiva, de prescripción extintiva de la acción y en subsidio las alegaciones vertidas por la demandada.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, de esta manera, encontrándose acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado, y la circunstancia de detención, prisión política y tortura de don Mario del Carmen Beltrán Herrera, y que no habría tenido lugar sin la



Foja: 1

intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, queda por dar establecida la responsabilidad del Estado de Chile en los hechos relatados.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la responsabilidad trae aparejada la indemnización o reparación de los daños sufridos por el actor.

VIGÉSIMO TERCERO: Que a partir oficio N°4792/8986 de fecha 09 de septiembre del 2022, remitido por el Instituto de Previsión Social, se da cuenta que don Mario del Carmen Beltrán Herrera en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura, ha recibido pensión previsional en virtud de la Ley N°19.992 y aporte único en base a la Ley N°20.874.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto al monto de la indemnización, se estará a la circunstancia de que el hecho que ha causado el agravio.

VIGÉSIMO QUINTO: Que el pago de la indemnización de perjuicios a pagar, deberá ser reajustada desde la fecha en que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada hasta su pago efectivo según la variación de índice de precios al consumidor (IPC), debiendo agregarse a tal suma de dinero los intereses corrientes devengados para operaciones no reajustables de dinero a contar desde que la presente sentencia definitiva adquiera su carácter de firme y ejecutoriada.

Por estas consideraciones, y vistos además, lo dispuesto en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra; Convención Americana de Derechos Humanos; Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados; artículos 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 4 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado; Leyes N° 19.123 y N° 19.980; y artículos 144, 170 y 254 y siguientes, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se declara:**

I.- Que el Estado de Chile debe pagar a la demandante, a modo de indemnización de perjuicios por daño moral a don Mario del Carmen Beltrán Herrera, la suma de \$150.000.000.- de pesos, con los reajustes e intereses que se indican en la consideración vigésimo quinta.

II.- Que por resultar totalmente vencida la demandada, se le condena al pago de las costas.

Regístrese.

C-5659-2020.-

PRONUNCIADA POR DOÑA JACQUELINE IVETTE BENQUIS MONARES, JUEZA TITULAR DEL DÉCIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, nueve de Febrero de dos mil veintitrés**

